
SEMANARIO JUDICIAL.

CIVIL.

CONCURSO NECESARIO formado á bienes de D. Juan de la Peña Madrazo, comenzado en el año de 1802 ante el subdelegado de Zitácuaro y seguido en el juzgado de Distrito de Michoacan por los representantes de los acreedores del primero y el C. Promotor fiscal en representacion del Erario federal.

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Morelia, Octubre 28 de 1869.—Vis-
tos estos autos sobre concurso necesario
formado á bienes de D. Juan de la Pe-
ña Madrazo; comenzado en el año de
1802 ante el subdelegado de Zitácuaro,
y seguido en este juzgado por los repre-
sentantes de los acreedores del primero
y el C. Promotor fiscal en representa-
cion del Erario federal; la copia de la
cuenta de arrendamiento con sus justi-
ficantes, presentada por el arrendatario;
las liquidaciones particulares de los cré-
ditos y la general del concurso; el esta-
do que manifiesta el lugar que ocupan
en el proyecto de graduacion, con ex-
presion de su importe, el de los ré-
ditos vencidos, etc.; el proyecto de gra-
duacion formado por el Síndico C. Lic.
Bruno Patiño por acuerdo unánime de

los acreedores; el cuaderno corriente de
los autos en que constan las actas de las
juntas habidas en los dos últimos años;
la citacion para sentencia con todo lo
mas que se tuvo presente y verconvino;
y considerando 1º que aunque en la jun-
ta de acreedores celebrada en 30 de Ju-
lio de 1868 se acordó encomendar al Sí-
ndico todos los trabajos previos al fallo
definitivo, y como el último de ellos, la
formacion del proyecto de graduacion,
sin considerar mas créditos que los que
alcancen á ser pagados con el valor de
la finca responsable y sin que dicho pro-
yecto atacase la libertad que el juzgado
debe tener para fallar segun su juicio y
por lo alegado y probado en autos.

Considerando 2º: que los acreedores
en junta celebrada en 25 de Octubre
de 1869 aprobaron por unanimidad de
los presentes, tanto la cuenta de arren-
damiento como las liquidaciones hechas
por el Síndico, así como igualmente el
citado proyecto de graduacion.

Considerando 3º: que tanto por el con-
sentimiento de los acreedores, como del
estudio de los diversos puntos de dere-
cho que encierra el proyecto de gradua-
cion, se forma el criterio judicial en fa-

vor de este documento, por haber sido hecho con arreglo á las disposiciones legales que fijan el orden, preferencia y antelación de los créditos en un juicio como el presente.

Considerando 4º: que todos los que figuran en el concurso á bienes de Peña Madrazo se deben reducir á las tres clases siguientes de las seis que establece el derecho, á saber, acreedores singularmente privilegiados, hipotecarios con privilegio, é hipotecarios sin él, por no haber acreedores de dominio y quedar excluidos en el proyecto los quirografarios y meramente personales, por no alcanzar á cubrirlos el caudal concursado.

Considerando 5º: que si bien en el proyecto de graduacion se coloca en el décimo nono lugar y entre los créditos escriturarios, el capital de cinco mil quinientos diez pesos que perteneció antes al juzgado de capellanías de este Obispado, y hoy al Erario federal, compuesto de varias capellanías cuyos principales impuso aquel con pension de réditos en los llenos, aperos y existencias de la hacienda de Laureles por escritura otorgada en 3 de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, con la hipoteca general de los bienes del deudor y la especial de aquellos, este capital debe colocarse entre los hipotecarios segun la antigüedad que le dá su fecha, por no ser derechas las razones que el Síndico expende en contrario, de haber constituido el censo sobre bienes muebles y no estar registrada la escritura referida; porque entre las cosas hipotecadas hay tambien bienes raíces, como consta en el documento citado y existe una gran diferencia entre no estar registrado un documento público, y no saberse la fecha y el lugar del registro, puesto que al márgen de aquel se vé la nota puesta por el escribano de haber sido registrado. Pero aun suponiendo la existencia de las dos circunstancias que á juicio del Sí-

dico vician y destruyen la hipoteca expresa y especial, le quedaria al crédito que nos ocupa la general tácita y legal por dos razones: la primera, por tratarse de un censo y de una imposicion á los que el Síndico con fundamento de las leyes otorga el carácter de hipotecarios, segun es de verse en varias partes de su proyecto, y muy especialmente á la foja 3 vuelta de esta pieza: la segunda, porque conteniendo la escritura en cuestion la general de los bienes, la hipoteca se estableció de derecho en la hacienda de Laureles, tan luego como el deudor comun adquirió la propiedad de esta.

Considerando 6º: que de autos consta plenamente probado que el concurso tiene un crédito activo contra el Tribunal de la Inquisicion por la suma de cuarenta mil pesos que tomó de los fondos de aquel para imponerlos en el Consulado de Comercio de Veracruz con el rédito de un cinco por ciento, y que el mismo Tribunal tenia otro crédito contra Peña Madrazo por igual suma, resultando de esto que el veintisiete de Abril de mil ochocientos cuatro figuró en el concurso el repetido Tribunal como deudor y acreedor, reuniéndose entónces las cinco condiciones establecidas en las leyes 20 y 21, tit. 14 part. 5ª para que de derecho quedase realizada la compensacion de ambos créditos, quedando en consecuencia extinguido y cesando de figurar en el activo y pasivo del concurso por ser iguales, siendo acaso esta la mente de la Inquisicion al conceder al Consulado cuarenta mil pesos en lugar de cincuenta que pedia: y como la excepcion de compensacion no ha sido puesta ni alegada en el curso del juicio, el juez debe declararla realizada desde el tiempo en que la Inquisicion reunió los dos caracteres de acreedor y deudor, segun la opinion unánime de los autores y entre ellos Escribche en su diccionario de legislacion palabra *compensacion*.

Considerando 7º: que el crédito del Tribunal de la Inquisición fué vendido despues por la gefatura de Hacienda del Estado á D. José Vallejo conforme á las leyes de Nacionalización de los bienes del clero, y que el gobierno general traspasó entónces derechos que no tenia, porque subrogado en lugar de la Inquisición no pudo adquirir ningunos sobre su crédito por haber quedado este extinguido, resultando por consiguiente esta adjudicación comprendida en el art. 5º del decreto de veintinueve de Marzo de mil ochocientos sesenta y dos.

Considerando 8º: que de autos tambien consta que algunos de los créditos del concurso que en el proyecto de graduación quedan fuera de lugar y no alcanzan á ser pagados, han percibido varias sumas por cuenta de réditos, debiendo por lo mismo hacer la devolución de ellas para que ingresen al activo.

Considerando 9º y último: que la cuenta de arrendamiento presentada por el albacea del general Michelena ha sido aprobada por los acreedores, únicos que tienen el derecho de observarla, así como tambien se acordó por los mismos se le devolvieran los documentos que la comprueban, Se declara:

Primero; que de consentimiento de los interesados y por sus propios legales fundamentos se aprueba el proyecto de graduación del concurso á bienes de D. Juan de la Peña Madrazo formado por el Síndico Lic. Bruno Patiño, con excepción de las partes relativas á los créditos de cuarenta mil pesos del Tribunal de la Inquisición y cinco mil quinientos diez del juzgado de Capellanías de este Obispado: pues el primero ha dejado de figurar en el concurso, y el segundo debe colocarse entre los hipotecarios, en el lugar que le dé su antigüedad.

Segundo; los créditos del concurso deben ser pagados en el orden y con la preferencia que se les dá en la siguiente graduación: 1º el crédito de ochenta y

nueve mil doscientos cuarenta pesos veintinueve centavos (\$89.240 21 cs.) de la testamentaria del general D. Mariano Michelena. 2º el crédito de mil trescientos diez y siete pesos cuarenta y siete centavos [\$ 1.317 47 cs.] pertenecientes al Erario federal por derechos de alcabala y cedido por el gobierno general á D. José Vallejo: el de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos cuarenta y seis centavos (\$2.858 46 cs.) pertenecientes al mismo por responsivas de guías y cedido al mismo Sr. Vallejo: el capital de dos mil trescientos pesos [\$2.300 00 cs.] pertenecientes al Hospital de mujeres dementes y cedido igualmente al Sr. Vallejo con sus réditos vencidos: el de quinientos [\$ 500] con sus réditos perteneciente al Monasterio de Monserrate, hoy de la propiedad del repetido Vallejo: 3º el crédito de tres mil ochocientos setenta y siete pesos setenta y cinco centavos [\$ 3.877 75 cs.] por honorarios debidos al subdelegado D. Ignacio Guerra Manzanares, por derechos de ejecución y décima, perteneciente hoy á sus herederos. 4º El capital de dos mil pesos y sus réditos (\$2.000) perteneciente á la capellanía que mandó fundar D. Alonso de Solórzano en 21 de Mayo de 1615, perteneciente hoy al Erario federal. 5º El de dos mil pesos y sus réditos (\$2.000) perteneciente al convento de San Francisco de esta ciudad y cedido á D. José Vallejo. 6º El de cuatro mil pesos y sus réditos (\$4.000) de la capellanía del Br. D. Mariano Martínez de Castro, propia hoy del Erario federal; y el de dos mil pesos con sus réditos (\$2.000) perteneciente á la capellanía que disfrutó Fray Vicente Rosas, cedido á D. José Vallejo. 7º El capital de mil quinientos pesos y sus réditos (\$ 1.500) perteneciente al juzgado de testamentos de México y cedido al mismo Sr. Vallejo. 8º El de mil quinientos treinta pesos cincuenta centavos y sus réditos (\$ 1.530 50) per-

teneciente á las religiosas de San Juan de la Penitencia, cedido al mismo señor. 9º El capital de cuatro mil pesos y sus réditos [\$4.000] de la capellanía del Br. D. Juan José Chavez: el de setecientos cincuenta pesos y sus réditos [\$ 750] de la del Br. D. Juan Antonio Cardoso, pertenecientes ambos hoy al Erario federal: el de tres mil pesos y sus réditos [\$3.000] de la capellanía del Br. D. Antonio Paniagua, cedido al Sr. Vallejo: el de trescientos pesos y sus réditos (\$ 300) pertenecientes á la cofradía del Santísimo de Zitácuaro; y el de cien pesos con sus réditos [\$ 100] del aceite de la lámpara de la misma ciudad, los dos hoy del erario federal. 10º El capital de cuatro mil pesos y sus réditos. [\$ 4.000] pertenecientes al convento de Carmelitas de México: el de igual cantidad y sus réditos (\$ 4.000) perteneciente al mismo convento: el de mil cien pesos y sus réditos (\$ 1.100) perteneciente á la Iglesia de Santa Teresa la antigua, propios ambos hoy del Erario federal. 11º El capital de cinco mil quinientos diez pesos y sus réditos [\$5.510] perteneciente al juzgado de testamentos de este Obispado, impuesto por escritura de 3 de Febrero de 1798, y de la propiedad hoy del Erario federal. 12º El capital de cuatro mil pesos (\$ 4.000) sin réditos perteneciente á D. Juan Madiazo Corral y representado hoy por el defensor de ausentes. 13º El capital de veinte mil ochocientos siete pesos que liquidado ya y sin réditos pertenece á las Sras. Gonzalez de la Guerra, de la propiedad hoy de la testamentaria del Sr. Michelena. Y como los demas capitales que figuran en el proyecto de graduacion despues de los mencionados, no alcanzan á ser pagados con el activo líquido del concurso se omite graduarlos, siguiendo en esto la mente é intencion de los acreedores constante en la acta respectiva de que se ha hecho mérito; en la inteligencia de

que si pagados los créditos de que antes se ha hablado y los gastos del concurso, resultare algun sobrante, se aplicará á los créditos que inmediatamente siguen en el orden en que están en el proyecto de graduacion.

Tercero. La gefatura de Hacienda procederá inmediatamente á formar la liquidacion del capital de cinco mil quinientos diez pesos y sus réditos vencidos, que se agregará á los autos en el lugar correspondiente, para que por ella se haga el pago del principal é intereses.

Cuarto. La misma gefatura devolverá á D. José Vallejo el precio que hubiere dado por el capital de cuarenta mil pesos de la Inquisicion, en la forma prevenida en el art. 5º del decreto de 29 de Marzo de 1862.

Quinto. Se aprueba la cuenta de arrendamiento presentada por el albacea de la testamentaria del general Michelena, devolviéndosele los comprobantes despues de sentar razon de ellos.

Sesto. Los créditos que por el presente fallo no alcancen á ser cubiertos y que hubieren percibido algunas cantidades á cuenta de réditos, las devolverán para que ingresen al activo del concurso.

Sétimo. Todas las dudas y dificultades que se susciten sobre la inteligencia del presente fallo, deberán resolverse por lo que el proyecto de graduacion establezca en la parte que las comprenda y no haya sido modificada en las anteriores resoluciones. El O. Lic. Gabino Ortiz juez de Distrito del Estado de Michoacan definitivamente juzgando, así lo decretó y firmó. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí. *Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Febrero 10 de 1871.—*Isidro Aleman*, escribano público.

PEDIMENTO del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que no son cuestiones oscuras y complicadas las que están hoy sujetas á la recta decision de vd.; pues ni se controvierte sobre la inteligencia difícil de alguna ley, ni se trata de hacer preveler la opinion de determinados autores de las muchas en que se encuentran divididos. Solamente hechos demostrados son objeto del presente negocio, y cuando sobre su realidad obran en autos los documentos mas claros y fehacientes, asombra, cómo han podido desatenderse al hacerles la debida aplicacion del derecho.

No es necesario investigar cuál haya sido el poderoso resorte que impulsó á las personas que intervinieron en la sentencia graduatoria de primera instancia á cometer los errores que en ella se notan. El Promotor no les hará observaciones sino en cuanto conduzcan á demostrar la justicia con que pide en nombre de la Hacienda pública la revocacion del fallo mencionado.

La Hacienda de los Laureles y sus anexas fueron concursadas en el año de mil ochocientos dos, siendo su dueño D. Juan de la Peña y Madrazo, á cuya petición se valuaron por los peritos D. Miguel Frutis y D. Manuel del Castillo en trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos seis granos. Aquel las habia adquirido desde el diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve en venta que le hicieron los herederos de D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra y de D^a Ana Josefa Estensoro por el precio de ciento cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos, cinco reales, cuatro y medio granos, de cuya cantidad quedó reconociendo el comprador setenta y dos mil setecientos ochenta pesos cuatro reales de censos de antigua imposicion sobre las mismas fincas.

Los créditos de este concurso pueden

dividirse, siguiendo el órden cronológico en cuatro clases. Primera la de los antiguos gravámenes anteriores á la época en que estuvo al frente de las fincas D^a Ana Josefa Estensoro. La de los impuestos por esta misma señora y anteriores á la adquisicion de los Laureles por Peña Madrazo. La de los posteriores desde esta época hasta el año de mil ochocientos veintinueve. El crédito del Sr. general D. Mariano Michelena.

Los gravámenes anteriores á la Sra. Estensoro, son los siguientes: mil quinientos pesos á que se redujeron los dos mil pesos que D. Diego Solórzano reconocia á favor de D. Blas Hernandez y D^a María Espinosa su mujer, por escritura sobre la Hacienda de Santa Bárbara de los Laureles, estendida á diez y nueve de Noviembre de mil seiscientos noventa, y registrada á cinco de Setiembre de mil seiscientos noventa y tres: dos mil pesos de la capellanía del Br. D. Tomás Contreras, que se obligó á reconocer D. Juan Chavez Osorio: seis mil pesos de dos capellanías, la una de dos mil de las que mandó fundar D^a Juana Quadros, de la que fué capellan D. Luis Moreno de Monroy; y los otro cuatro mil de la que servia el Br. D. Domingo Martinez, y se obligó á reconocer D. Juan Chavez en la precitada Hacienda: mil quinientos treinta pesos, cuatro reales que D^a Teresa Vernal de Astete, como heredera de D. Juan Chavez, su marido reconocia á favor del convento de San Juan de la Penitencia, por escritura otorgada en México á veintitres de Diciembre de mil setecientos veintidos, y registrada á cuatro de Noviembre de mil setecientos veinticuatro: mas cuatro mil pesos de la capellanía que fundaron D. Angel Gonzalez Tagle y D^a Teresa de Astete: cuatro mil pertenecientes á la capellanía del Br. D. Nicolás Oneto: quinientos para la fiesta de Santa Gertrudis en la Iglesia de Monserrate: cuatro mil de la capellanía de

los hijos varones que tuviera D^a Ana Estensoro: mil cien pesos para la misa de los viérnes, que mandó se dijera D^a Tercsa Vernal de Astete: mas dos mil para la casa de mujeres dementes: dos mil pesos pertenecientes á la obra pía del convento de San Francisco de Morelia: setecientos cincuenta pesos de la del Bachiller D. Antonio Paniagua: trescientos de la cofradía del Santísimo de Zitácuaro, y cien del aceite de su lámpara que reconoció sobre las mismas Haciendas D. Antonio Vicente Gonzalez de la Guerra por escritura otorgada en cinco de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho y registrada cuatro días despues.

Todas estas cantidades forman la suma de treinta y dos mil setecientos ochenta pesos cincuenta centavos de imposiciones anteriores á las de D^a Ana Josefa Estensoro.

Estos créditos pertenecen hoy á la Hacienda pública federal, en virtud de las leyes de doce y trece de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve, con excepcion de los redimidos por el Sr. D. José Vallejo, que habiendo escojido los que mejor le parecieron, trató de interrumpir la consolidacion que de ellos se habia efectuado. Tienen el carácter de hipotecarios, y así á estos solo debieron anteponerseles los singularmente privilegiados. En la sentencia graduatoria debió haberse colocado cada capital de los expresados, según su respectiva antigüedad. Es un principio general que aquel que es primero en tiempo, es preferido en derecho. "*qui prior est tempore potior est jure.*" Y esta sabia y justa regla, tiene su mas exacta aplicacion á las hipotecas especiales cuando concurren entre sí.

"Guisada cosa es, é derecha que aquel que recibe primeramente la cosa á peñes, que mayor derecho haya en ella, que el otro que la recibe despues." [Ley 27, tít. 13 part. 5^a]

D^a Ana Josefa de Estensoro tomó á réditos cuarenta mil pesos pertenecientes al Real Fisco de la extinguida Inquisición, con hipoteca de Santa Bárbara de los Laureles y sus anexas, por escritura de veintiocho de Abril de mil setecientos ochenta y cinco, registrada en dos de Mayo del mismo año. Por la certificacion del escribano Ramirez dada en Zitácuaro á seis de Febrero de mil ochocientos dos, aparece que por escritura otorgada en México á diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve por D^a Ana Félix Gonzalez Guerra, esposa de D. Ignacio Celis que otorgó su consentimiento, por D^a María Gertrudis, viuda de D. Manuel Gomez Cosío, y por D^a María Antonia, doncella, mayor de edad, hermanas todas, y herederas de D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra y de D^a Ana Estensoro, fueron vendidas las haciendas de Laureles á Peña Madrazo en ciento cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos, cinco reales, cuatro y medio granos, de cuya cantidad quedó reconociendo el comprador los setenta y dos mil setecientos ochenta pesos, cincuenta centavos, de los censos referidos, mas mil pesos que la Sra. Estensoro, en la cláusula quince de su testamento impuso para una fiesta que debía celebrarse anualmente á Nuestra Sra. de Zapopa: mil cien pesos que en una de las hojas en blanco dejó, para que con los réditos se dijieran misas rezadas en el convento de San Francisco de Zitácuaro, seis mil ciento trece pesos tres reales de deudas pasivas, cuyas cantidades hacen la total de ochenta mil novecientos noventa y tres pesos, siete reales, quedando á cargo del comprador pagar las deudas pasivas que sumaban seis mil ciento trece pesos tres reales en el término de dos años contados desde la fecha de la imposicion. La escritura de dos mil cien pesos de las obras pías mandadas fundar en su testamento por D^a Josefa Esten-

soro fué otorgada en México á diez y nueve de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve y registrada en Zitácuaro á diez y ocho de Octubre del mismo año.

Existe además una escritura otorgada (y registrada) por Peña Madrazo á tres de Febrero de mil setecientos noventa y ocho, por cinco mil quinientos diez pesos que á título de depósito irregular recibió del juzgado de testamentos de Valladolid. En ella consta que se registró el mismo día de su otorgamiento, en la referida ciudad de Valladolid hipotecando el deudor las existencias de Laureles.

El primero de estos créditos, es decir, el de los cuarenta mil pesos de la Inquisición, debió colocarse inmediatamente después de todos los anteriores á la Sra. Estensóro por ser simplemente hipotecario. Este crédito ha sido declarado compensado en la sentencia de primera instancia, en lo que está conforme el Promotor, con excepcion de la parte en que se dice que no importa la fecha en que se haya verificado la compensación. En la misma sentencia se determinó se devolviese al Sr. Vallejo lo que hubiere dado por el citado capital. No pudiendo subsistir el contrato en lo principal, tampoco debe existir en lo accesorio, según el tan sabido principio: *"accessorium naturam sequi congruit principalis."*

Nada mas justo que la compensación indicada, y es de notarse que el Sr. Vallejo es el único acreedor que se opone á ella cuando desde el veinticuatro de Mayo de mil ochocientos treinta fué declarada á petición del general Michelena, cuyo albacea es. Se hace preciso recordar este curioso incidente.

D. Cayetano Guerrero presentó un escrito (fojas 22 c. núm. 2) que ratificó el Sr. Michelena en veintidos de Mayo de mil ochocientos treinta, diciendo: que en Julio de mil ochocientos dos se trabó ejecución en las Haciendas de los Lau-

reles, de orden de la Inquisición por cuarenta mil pesos de capital que se debían: que hecho el embargo se hizo otra ejecución por el mismo Tribunal en Noviembre de mil ochocientos tres, en razón de réditos y deudas, sin previa liquidación, que tampoco tuvo lugar después: que las fincas de tal manera venían disminuyendo, que hasta la fecha en que hablaba, habían menguado doscientos mil pesos, puesto que antes valían cuatrocientos mil: que á veintisiete de Julio de mil ochocientos diez, el apoderado del Consulado de Veracruz había recibido cuarenta mil pesos del Concurso de Laureles por orden de la Inquisición; y que esta ó había impuesto esta cantidad como que tenía el depósito del dinero y en tal caso abusó y era responsable á los réditos corridos desde el seis de Agosto de mil ochocientos diez, ó se había pagado de su crédito; y así se le debían descontar de este los cuarenta mil pesos, previa la liquidación que se hiciese por la Contaduría de temporalidades. El proveído que recayó á este escrito fué el siguiente:

"Juzgado de Distrito.—Morelia, veinticuatro de Mayo de mil ochocientos treinta.—Vista la notificación que antecede y testimonio suscrito por el Ministro contador de temporalidades, en el que con referencia á los documentos originales que existen en dicha oficina, se dice que en el año de mil ochocientos diez la extinguida Inquisición impuso cuarenta mil pesos pertenecientes al concurso en el abolido Consulado de Veracruz: procédase á la liquidación que se pide, trayéndose á colación dicha cantidad de que debe hacerse cargo la Hacienda pública en el crédito que en él representa. Lo mandó el C. juez de Distrito y lo firmó con testigos de asistencia. Doy fé.—*Miñon*.—Asistencia.—*Miguel Montaña*.—Asistencia.—*Florentino Rocha*." En la misma fecha se siguió la notificación al Sr. Michelena, pero no

al Promotor Fiscal, que para este decreto ni lo tuvo ni lo nombró el Lic. Mifion.

Debe por lo mismo deshacerse como improcedente la apelacion interpuesta sobre este punto por el Sr. D. José Vallejo. Consta por el informe estendido por el secretario que fué de secuestros, que Peña y Madrazo desde [el mes de] Julio de mil ochocientos cinco, hasta el mismo mes de mil ochocientos diez, enteró á la Tesorería de la Inquisicion, como administrador de las fincas concursadas, sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos; cuya inversion ha sido: la de mil trescientos tres pesos cincuenta centavos del dos por ciento de gastos de cobranza del Tesorero: veinticinco mil quinientos cuarenta pesos pagados de réditos á varios acreedores (sin incluir al Fisco de la Inquisicion) desde el once de Julio de mil ochocientos seis hasta veintitres de Octubre de mil ochocientos doce: y cuarenta mil que en seis de Agosto de mil ochocientos diez, tomó la Inquisicion para entregarlos con un cinco por ciento de réditos anual al Consulado de Veracruz. Esta es la época en que se verificó la compensacion, que no puede estenderse á los réditos vencidos desde el primero de Setiembre de mil ochocientos uno, hasta el citado seis de Agosto de mil ochocientos diez: época en que es indispensable fijar, no obstante la opinion en contrario del C. juez de Distrito de Michoacan en la sentencia graduatoria, con la que ha inferido notables perjuicios al Erario nacional, que es acreedor por este capítulo á la cantidad de diez y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos noventa centavos que importan los mencionados réditos.

La compensacion no es mas que la libertad respectiva de deudas entre dos personas, que son á la vez deudores y mútuos acreedores. Puede ser considerada como una especie de permuta de obligaciones que se verifica solo por mi-

nisterio de la ley, y aun sin que lo sepan los deudores, en cuyo interés está libertarse recíprocamente de procedimientos judiciales, largos, inútiles y dispendiosos: "*Ideo compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non sölvere, quam solutum repetere.*" Para que tenga lugar no es necesario que la causa de la obligacion sea semejante, ni que sea exactamente igual la cantidad por ambas partes debida, pues si no lo es, surtirá su efecto la compensacion en la parte concurrente, quedando en pié por la restante: "*Si constat pecuniam invicem deberi: ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore, ex quo ab utraque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates, ejusque solius, quoad amplius apud alterum est, usurec debentur, si modo petitio earum subsistit.*" (L. 4 D. de compens.) Aunque por razon de moralidad se niega al depositario la retencion de lo que se le confió, reputándose por una ficcion legal que se halla en manos del mismo propietario, la misma moral repugna que esta ficcion se torne en daño y escarnio del depositante, cuando está conforme en que se verifique la compensacion remitiendo al depositario las acciones que contra el tiene.

Ni puede obstar á la compensacion propuesta la prohibicion que contiene la ley 26 tít. 14 part. 5ª, para que no se compensen los créditos fiscales, porque cuando aquella se verificó el crédito pertenecía á la Inquisicion, y seria preciso que la obligacion una vez extinguida pudiese revivir para que hoy pudiera aplicársele la referida ley. "*Actio seu obligatio semel extincta amplius non reviviscit.*" [L. 83 de verb. obligat.]

La ley 20 tít. 14 part. 5ª define así la compensacion: "es otra manera de pagamiento, porque se desata la obligacion de la debda que un ome deve á otro." De aquí es, "que equivale en todos sus efectos á la paga real, y de consiguiente

extingue la accion del acreedor desde el mismo punto en que el deudor adquiere otra contra aquel en el todo ó á prorrata; y este es lo que se llama *conquistarla ipso jure* sin esperar á que se proponga como excepcion ó defensa; pues esta diligencia exterior mas sirve de instruir al juez de los respectivos créditos que inducen la compensacion y de explicar la intencion de compensarlos, que siempre se presume la hay por ser mas útil, que para producirla como accion ó reconvencion sin que trascienda el influjo de la propuesta compensacion desde entónces á extinguir la accion del acreedor contrario, que ya viene *conquistada* desde la respectiva union de los créditos." [Cañada juicios civiles part. 1.^a cap. 5.]

El Promotor ha insistido sobre este punto, porque es la clave para que sean pagados los créditos de la Hacienda pública y no resulte imaginaria la graduacion. Así sucederia en efecto, si como propone el Síndico se satisficiesen de toda preferencia, las cantidades que reclama la testamentaria del Sr. Michelena y los ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos que pide el Sr. Vallejo por el crédito de la Inquisicion. El Fisco como sucesor en las cargas de los extinguidos Consulados, tendria entónces que devolver al Concurso esa exorbitante cantidad; pagando así muy cara su condescendencia por haber permitido al Sr. Vallejo escojer los capitales que mejor le parecieron, y el error de este al redimir uno compensado, con entero conocimiento de causa.

Los dos mil cien pesos legados para obras pías por la Sra. Estensoro, deben ocupar el lugar inmediato á los diez y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos que se deben á la Hacienda federal por réditos no compensados del capital de la Inquisicion. En seguida debe colocarse el crédito de cinco mil quinientos diez pesos, de la escritura, que con

hipoteca especial de los llenos de Laureles y general de todos sus bienes presentes y futuros, otorgó Peña y Madrazo en favor del juzgado de testamentos de Morelia. Sin embargo, se les han antepuesto no solo á estos, sino á todos los hipotecarios anteriores dos créditos pertenecientes al Sr. Vallejo, que son recibos de alcabalas y derechos fiscales, el uno de veintidos de Noviembre de mil ochocientos tres por cantidad de tres mil quinientos setenta y siete pesos, setenta y cinco centavos, y el otro por la de mil trescientos diez y siete pesos cuarenta y siete centavos de doce de Junio de mil ochocientos seis. Estos créditos, aun que eran de la Hacienda federal, nunca pudieron ser colocados en lugar preferente á los de los acreedores con hipoteca anterior expresa, especial ó general. "Tal privilegio ha el debdo de la Cámara del Rey, ó otrosi lo que deue el marido á la mujer por dote, maguer estos deudores sean postrimeros, primeramente deuen ser entregados, la Cámara del Rey, en los bienes de su deudor, que otro ninguno, á quien deuiessen algo. Otrosi la mujer, en bienes de su marido; fueras en de en vn caso: si el debdo primero es sobre peño que ouiesse empeñado á alguno señaladamente, ó si ouiesse obligado por palabras *todos sus bienes*. Ca entonce, tal debdo como este, que fuesse primero, ante deue ser pagado, que el otro de la Cámara del Rey, nin el dote de la mujer." [L. 33 tít. 13 P. 5.^a]

La ilustracion del Derecho Real de España ordenada por D. Juan Sala y reformada y añadida con diversas disposiciones del derecho novísimo (edicion de mil ochocientos cincuenta y dos) en el lib. 2.^o tít. 18 núm. 21, espone así ésta ley: "El Fisco, por el cobro de la alcabala, tributos y demas derechos se prefiere á los acreedores de hipoteca tácita, porque la obligacion de satisfacerlos está inherente á los bienes y es insepara-

ble de ellos; mas no tiene preferencia sobre los acreedores que tengan hipoteca anterior expresa especial ó general.”

Escribhe, en su diccionario de Legislacion, artículo Fisco, dice: “El Fisco goza sobre los bienes de sus deudores el privilegio ó derecho de ser preferido á los acreedores anteriores que tengan igualmente hipoteca tácita, y á los posteriores que la tengan tácita ó expresa, ora sea esta general, ora especial, pero no á los anteriores que la tengan expresa, sea especial ó general.”

Sin embargo, de tan terminante disposicion de la ley citada, se ha invertido el orden en la graduacion de los créditos, y como para eludirla era preciso alegar algun pretesto, pronto se encontró en lo que se puede llamar etimológicamente hablando escritura de catorce de Noviembre de mil ochocientos treinta. Por este indefinible documento, el Sr. Michelena cedió á la Hacienda pública federal, sus derechos de prelacion y los de los demas acreedores, á fin de que fuesen pagados los créditos del Fisco, que hoy representa el Sr. Vallejo, en virtud de la desamortizacion que de ellos hizo. Y no por hacerle bien y buena obra, sino para sacar de sus manos las fincas de Laureles que secuestradas como se ha dicho por la Inquisicion pasaron en el mismo Estado á la Hacienda pública, conforme al decreto de veintidos de Febrero de mil ochocientos trece.

En la foja once del cuaderno B número 2. de los autos, se vé que en cinco de Junio de mil ochocientos treinta, compareció el Sr. Michelena acompañando el poder que obra á fojas trece; diciendo: que las Haciendas valian quando se embargaron trescientos noventa y siete mil ciento ochenta y ocho pesos cinco reales tres granos: que en el año de veintitres importaban las existencias setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos siete reales: que en

mil ochocientos veintisiete disminuyeron éstas hasta diez y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos, dos reales nueve granos, y que suponiendo igual en todos tiempos el valor de las tierras, porque nadie se las podía llevar, las fincas concursadas todos los dias van á menos: que por tanto pedia en su nombre y en el de sus poderdantes se celebrase una junta. El juez decretó de conformidad. No se citó al promotor fiscal, ni se le dió conocimiento de esta peticion. En siete de Junio del mismo año, volvió á comparecer solo el Sr. Michelena, y declarada junta su comparecencia por el C. Juez de Distrito, como único asistente tomó aquel la palabra y dijo: primero, que en nombre de la junta general de acreedores recibiría en depósito las Haciendas, con libre, franca y general administracion hasta que fuesen vendidas: segundo, que para seguro de los intereses de la Hacienda pública, hipotecaba todos los de los acreedores, así como los propios, en nombre de la junta: tercero, que se respetarian los arrendamientos actuales: cuarto, que la junta, previa liquidacion del crédito de la Hacienda pública, se obligaba al pago de esta deuda en los términos y cantidades que se convinieran con el Supremo Gobierno, para lo que el Juzgado de Distrito libraria los recados correspondientes.

No esperó el juez la respuesta de semejantes recados, que jamás llegó á librar, y sin previa audiencia fiscal proveyó su auto de doce de Junio de mil ochocientos treinta, que á la letra dice: “Apruébase lo tratado en la junta del siete del que rije, extendiéndose, en consecuencia, la escritura acordada expresándose en ella cuanto en lo futuro aclare los derechos de los interesados en el Concurso; como tambien el que lo estipulado destruye la secuela que á este debe darse, ni lo que con respecto á este está pendiente: procédase á la formal

entrega de la finca á la persona que designen los acreedores." En catorce del mismo, presente el escribano en la morada del Exmo. Sr. apoderado le hizo saber el auto anterior, siendo á la única persona á quien se le notificó.

Como consecuencia de este auto, en el mismo día que se le hizo la notificación, es decir, en catorce de Junio de mil ochocientos treinta, volvió á comparecer el Exmo. Sr. general de brigada D. José Mariano Michelena en propia representación y como apoderado de varios interesados del Concurso. Así ante el O. Juez de Distrito, dijo; que por sí y á nombre de sus poderdantes se obligaba á recibir en depósito con libre, franca y general administración la Hacienda de los Laureles, é intereses del concurso recibiendo todas sus tierras, oficinas, casa, aguas, máquinas, muebles y semovientes; constituyéndose responsable de todos y cada uno de dichos bienes, los que mantendría en fiel guarda y depósito, sujetándose á todas las leyes y responsabilidades que por solo el título de depositario prescribe el derecho, renunciando por sí y á nombre de sus poderdantes cuantos beneficios puedan aquellas dispensarle; pues quiere el Exmo. Sr. apoderado que para la devolución de la dicha finca y demas bienes que con calidad de depósito recibe, se le compela y apremie por la autoridad que conozca de dicho concurso luego que llegue el tiempo de la enajenación; la cual podia promoverse por cualesquiera de los interesados: que para caucionar los intereses que reciben los acreedores pertenecientes al concurso; y el que resulte líquido deberse á la Hacienda federal, obligan todos y cada uno de los dichos acreedores el interes ó acción que representan en el concurso, renunciando á favor de la Hacienda federal cualesquiera derecho de prelación que por el suyo tengan, hipotecando además en el remoto evento de que por aluvion ú otro ca-

so fortuito ó inesperado se perdiera el casco de la finca que es bastante para cubrir cualquiera cantidad; los bienes propios que todos y cada uno de los acreedores poseen actualmente, y tengan en el tiempo subsecuente, renunciando cuantos beneficios puedan serles favorables y que tiendan á eludir é invalidar la hipoteca y responsabilidad que resultare á favor de la Hacienda pública federal.

En la junta extrajudicial, verificada en la ciudad de Morelia á veintiseis de Octubre de mil ochocientos cuarenta y seis, el Sr. Michelena propuso: "se sirviera el concurso, si lo juzgaba conveniente, facultarlo ampliamente para convenirse de alguna manera con el representante de la Hacienda pública sobre el pago del crédito que esta tiene contra Laureles." En la acta de veinte de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y ocho, se dice que el Sr. Michelena presentó los inventarios para la disolución de la compañía, [que contrajo con los demas acreedores, con excepción de la Hacienda pública] según los cuales resultaba un valor de doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos, noventa y siete centavos, incluidas las deudas activas, haciendo presente que "si no había intervenido la licencia del Sr. juez de Distrito para la formación extrajudicial de ellos" era porque dicho juez quería, para concederla, tomar conocimiento de los autos, lo que hubiera sido muy perjudicial al concurso, así por la demora, "como por los trastornos que se originarian al jiro que se ha querido dar al Concurso." En la acta de primero de Junio de mil ochocientos cincuenta y dos, el Sr. Pereda dijo, que quedaba comprometido como representante de los concursos de Saravia y Rios, y no así respecto de su representación por la Hacienda pública, pues en lo tocante á esta á lo que se compromete es á solicitar de la junta de crédito público, y del Supremo Gobier-

no la autorizacion necesaria para contraer el mismo compromiso.

La cesion es un contrato por el que uno traspasa á otro los derechos ó acciones que le corresponden contra un tercero. Necesita por lo mismo para existir ciertas circunstancias esenciales, como son el consentimiento y la capacidad para prestarlo, así del cedente como del cesionario. Como se ha visto por la relacion de los hechos que preceden, en el caso en cuestion, hubo cedente que fué el Sr. Michelena, mas no cesionario; faltando por consiguiente aquel *duorum vel plurium in idem placitum consensus* que los romanos llamaron convenio ó convencion y que en su legislacion así como en la nuestra es la base de todos los contratos. "*Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotia contrahendi, transigendique causa consentiunt, qui inter se agunt: Nam sicuti convenire dicuntur, qui ex diversis locis in unum [locum] colliguntur, et veniunt: ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est, in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius, nullum esse contractum, nullam obligationem quæ non habeat in se conventionem: sive re, sive verbis fiat, nam et stipulatio, quæ verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est.*" [L. 1 § 3. de pactis.] Como los créditos y acciones son derechos inherentes á la persona del acreedor, si atendemos al rigor del derecho, no pueden transferirse ni cederse, porque habiéndose obligado el deudor para con cierta persona no puede quedar obligado para con otra. Sin embargo, los jurisconsultos han inventado un modo de transferir los créditos sin intervencion ni consentimiento del deudor. Como el acreedor puede ejercer su accion contra el deudor, no solo por sí mismo, sino por medio de un mandatario; cuando quiere ceder su crédito á un tercero, le nombra y consti-

tuye su apoderado. Este mandatario se llama por los jurisconsultos procurador en su misma causa, *procurator in rem suam*, porque desempeña el mandato, no por cuenta del mandante sino por la suya propia. Siendo el mandato un contrato bilateral [L. 25. tit. 12 part 5ª] debe serlo la cesion de derechos cualesquiera que sea su naturaleza. En las comparecencias referidas solo han intervenido el juez con ese carácter, ó de escribano si se quiere, y el Sr. Michelena; y no representante alguno de la Hacienda pública. Por lo mismo puede decirse que no hubo cesion de derechos de prelación al Fisco, por la comparecencia de catorce de Junio de mil ochocientos treinta.

Ni puede alegarse que el Sr. Michelena usó en este caso del remedio acostumbrado por los acreedores para sacar el concurso de la jurisdiccion propia de la Hacienda pública; porque ni fué ese su objeto, ni el medio á que se alude es otro que la paga real y verdadera.

Don Francisco Salgado de Somoza, en su célebre Laberinto de acreedores, part. 1ª cap. 7. trata de este remedio extensamente. Explica que el Fisco, ya sea citado como acreedor, ya compareciendo de cualquiera otra manera en el Concurso, puede atraer el conocimiento del juicio á sus jueces privativos; porque el promotor fiscal en los derechos y causas que pertenecen á la Hacienda pública y sus incidentes, no está obligado á comparecer delante de otros jueces que los del Tribunal que conoce privativamente de los negocios fiscales. Esta resolucion procede, ya sea el Fisco actor ya demandado. Porque donde quiera que este interviene, sea deduciendo acciones, ó excepcionándose, ó compareciendo, ó de cualquier modo que esté interesado en el negocio: sin tener en cuenta los fueros ajenos atrae al suyo el conocimiento de este.

Sin embargo, existe un remedio sin-

gular por el que los acreedores de un concurso impiden su atracción al Fisco, á fin de evitarse las molestias consiguientes. Cesando toda sospecha de fraude y simulación, se conviene entre la mayor parte de los acreedores y consienten en que del cuerpo de bienes del concurso se separe cierta cantidad de dinero con la que se satisface el crédito fiscal, por que con la paga se estingue todo derecho. Despues de que por esta entrega queda separado del concurso el Fisco; no se vuelve á hacer cuenta de él: "*Cessante igitur simulationis et fraudis suspitione solent creditores [et quibus avocatio decreto tribunalis intimatur] inter se conveniri, sive inter eorum majorem partem, et consentire, quod ex corpore bonorum concursus dismembretur quantitas pecunie, credito fisci correspondens, et illi satisfacere, et solvere: quia solutione omne extinguitur jus. . . . Postquam enim per oblationem, et solutionem separatus est fiscus á bonis concursus, ejus ratio habenda amplius non est in ipso concursu, quia separatorum natura est, diversitatem inducere, sicque concursus prosequi debet inter omnes ceteros creditores prout antea fisco jam dimisso.*" [Salgado, Labyrinth. credit. cap. 7 n. 14, 15, 18, 19, 20.] Y en estos autos encontramos, que la Inquisición usó de este remedio pagando á la Real Hacienda el crédito de alcabala y el de derechos fiscales, representados hoy por el Sr. Vallejo.

Aun suponiendo que los créditos de la Inquisición, que fueron de la Hacienda pública hubieran gozado del derecho de ser preferidos á los demas acreedores en virtud de la comparecencia de catorce de Junio de mil ochocientos treinta; nunca pudo transmitirse al Sr. Vallejo un privilegio personal y privativo del Fisco, con perjuicio de este. El Sr. Vallejo ha adquirido esos capitales redimiéndolos en virtud de las leyes que declararon nacionales los bienes que administraba el clero secular y regular,

sin atender á que los primeros pertenecían de antemano al Erario Nacional, en virtud del Decreto de veintidos de Febrero de mil ochocientos trece, y por lo mismo no son de los comprendidos en los artículos once y quince de la ley de trece de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve. Por esta ley se confundieron en manos de la Hacienda pública los capitales que nuevamente adquirió, con estos antiguos que tenían el privilegio de ser pagados íntegramente [se habla en el supuesto de que realmente lo tuvieran]; y así es, que no pudo ceder esto sin perjudicarse en el pago de los que ha conservado. Es por tanto absurdo el traspaso de tan esorbitante derecho.

Don Alfonso de Olea es el autor que mas latamente trata de la Cesión de las acciones y derechos. En el título sexto, cuestión segunda, se ocupa de la de "si acaso los derechos del cedente con su privilegio se trasieran al cesionario." Despues de enumerar algunas opiniones de los intérpretes, distingue el privilegio real del personal y asienta que el primero pasa al cesionario á diferencia del segundo que no es transmisible, si no es en el caso en que se le siguiese daño al cedente, por no transmitirlo. [núm. 12, 19, 20.] En la cuestión tercera del mismo título enseña cómo en el Fisco es especial el poder transmitir á su voluntad sus privilegios personales al cesionario. Y ocupándose acerca del privilegio de prelación-manifiesta que solo es transmisible en el caso en que la anterior cuestión ha resultado serlo: es á saber, cuando de no transmitirlo se le siguiese perjuicio al Fisco (tít. 6 quest. 3ª núm. 26, 27, 28.) Por lo demas, no existe ley alguna que mande que el privilegio de prelación pueda transferirse á otro. "*Atque vero sentiunt fisci cessionario plus quam aliis indulgendum non esse, quia nullibi cautum invenitur, quod fiscus prælationis privilegium in alium transferat.*"

Si los privilegios del Fisco solo pasan al cesionario cuando en ello tiene interés el primero: Claro es, que no puede transmitirlos como cedente en propio perjuicio y ajeno beneficio. "*Argumentum á contrario sensu in jure validum prorsus est*" (L. 20 D. qui testamenta facere possunt) y es tal la fuerza de este argumento que se forma del sentido contrario que solo cesa si lo contradicen otras leyes. Mas en el caso, ya hemos manifestado que estas no existen: "*argumentum á contrario sensu in jure omnino cessat si alia jura obstant.*"

Para concluir esta materia solo se hará presente que las leyes de partida mandan no sean transmisibles los privilegios personales. "*Et dixerón otrosi, que los privilegios, que son dados á algunos por razon de sus personas, que non pasan á sus herederos; fueras ende, si en la carta ó en los privilegios lo dixere.*" [L. 27. tit. 34 part. 7.]

Mas si el Tribunal considera válida el acta referida, no puede ser para otro efecto, que para que los créditos fiscales sean pagados con preferencia á los de todos los acreedores, segun las amplias promesas que en aquella se contienen, y á cuyo cumplimiento, está mas estrictamente obligado el Sr. Vallojo como albacea del Sr. Michelena, y en lo personal por la hipoteca que de sus bienes por haber, hicieron los acreedores por medio del Sr. Michelena para asegurar el pago de la Hacienda Federal.

El crédito de los mil cien pesos de los legados piadosos por la Sra. Estensoro, es preferible á los de los herederos de Guerra y de Otero, porque ademas de la hipoteca especial que tiene constituida, posee la legal tácita que la ley 26 tit. 13 Partida 5ª concede á los legatarios. "*Otrosi dezimos que los bienes de cada un ome que fizeze mandas en su testamento, que fincan obligados á aquellos á quien fizo las mandas fasta*

que sean pagadas dellas. En el cuaderno X. X. fs. 75 de estos autos se encuentra una escritura otorgada en México, á diez y siete de Enero de mil ochocientos veinte y nueve, en la cual consta que D. Juan Soto y Echarte traspasó en venta al Sr. General D. José Mariano Michelena, los cuarenta y cuatro mil pesos que refiere haber recibido el deudor comun á veinticuatro de Octubre de mil setecientos cuarenta y siete de la Moza de Aranzazu. Parece que este fué el primer título que tuvo el Sr. Michelena, para tomar parte en el Concurso de Laureles.

En la foja tres del cuaderno número cuarenta y tres, se halla que en México, á diez y siete de Julio de mil ochocientos treinta, los Señores D. Pedro Hernandez, Lic. D. Mariano Dominguez y D. Angel Salgado componiendo la junta menor nombrada extrajudicialmente por la general de acreedores á once de Mayo del mismo año segun ahí mismo se refiere pues no obra en autos la acta de tal junta general celebraron con el Señor Michelena una compañía á nombre del concurso de Laureles, bajo las condiciones siguientes: primero: que seria fondo de la expresada compañía por parte del Concurso, la hacienda con sus ranchos anexos, enseres, aguas, y tambien las cantidades existentes y por cobrar en la finca en poder de los fiadores del anterior arrendatario D. Ignacio del Valle y de cualquiera otro deudor para cuyos cobros queda autorizado el Sr. Michelena incluyéndose en estos el del concurso de la hacienda de Apeo facultándole para transar este litigio: segunda: seria obligacion del Sr. Michelena recibir la finca por inventario formal que se haria con autorizacion del Juez de Zitácuaro recibéndola de los encargados de los fiadores de D. Ignacio del Valle. Confrontando el inventario por el que recibió este, con las actuales existencias, nombrando un perito

que haga los avaluos, asociando con el que nombren los fiadores: tercera: que el Sr. Michelena á mas de su industria habida de introducir como fondo de la compañía, el capital de veinte mil pesos en reales, muebles, y efectos convenientes al jiro de la negociacion. Formando al mes de la introduccion de ellos, una cuenta comprobada con los papeles de ventas y recibos en reales en la finca, que autorizaria el Juez, de manera que con toda separacion y claridad se sepa y conste por los libros y cuentas lo que pertenece á la Hacienda y lo que debia introducir el Sr. socio: cuarta: que esta compañía duraria el tiempo que estuviere sin venderse la Hacienda, cuyo remate debia efectuarse en los términos convenientes sin perjuicio del tiempo de moler y remoler: quinta: que el Sr. Michelena quedaba obligado á remitir cada seis meses al Síndico y Junta menor una cuenta general de cargo y data para la intelijencia de los acreedores, y para que si hubiere algun sobrante de dinero fuere invertido en pago de costas y de réditos: sexta: que al terminarse la compañía habia de formarse un nuevo inventario para recibirse la Hacienda; y deduciendo el valor de los fondos las utilidades que hubiere por aumentos de muebles, mejoras de fábricas y productos que haya habido se partirán por mitades entre ambos socios, así como tambien las pérdidas que hubiere por mejoras de fábricas, etc., etc.: sétima: si hecho el inventario de que habla la cláusula anterior y formada la cuenta de division y compañía resultare debérsele al Sr. Michelena alguna cantidad por su parte de utilidades y fondo y caudal que introdujo en la sociedad y no hubiere dinero efectivo para satisfacerle, se pagará con los muebles que quisiere tomar al precio que entonces se les diera, y si algo se le restaba ó no queria tomar muebles, se le pagaria con las primeras exhibiciones que hicie-

Tomo III—Parte II.

re el comprador de la finca: octava: que llegado el caso de disolver esta compañía habiendo utilidades llevará el Sr. Michelena lo que le perteneciere segun se refiere en la cláusula anterior; pero sin que la Hacienda quede con menos de las actuales existencias que tenia al tiempo del otorgamiento de esta escritura: novena: que si no se proporcionaba la venta de la Hacienda, duraria esta compañía por siete años contados desde la fecha de la escritura de compañía (que es la de diez y siete de Julio de mil ochocientos treinta) dando siempre el tiempo de moler y remoler. ¿Cómo ha cumplido con las obligaciones contraidas en esta escritura el Sr. Michelena? El Sr. Magistrado que preside este acto lo sabe tambien como los acreedores; pero á los derechos que el Fiscal representa importa consignarlo á fin de que no prevalezcan contra el concurso, hechos á los que se les ha querido dar un barniz de Justicia. En consecuencia de la escritura anterior y comparecencia de catorce de Julio de mil ochocientos treinta, el Sr. Michelena pasó á Zitácuaro y con el representante de los fiadores de D. Ignacio del Valle presentó un escrito al Juez de primera instancia de aquella villa, á diez de Octubre de mil ochocientos treinta pidiendo licencia para formar los inventarios extrajudiciales y le fué otorgada. En seguida se practicaron los inventarios de los que resulta que ademas de los terrenos y casas de Laureles recibió el Sr. Michelena diez y seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos, diez centavos en apero y existencias, sin que en éstas se haya incluido las deudas activas contra los peones. Consta que solo en el año de mil ochocientos seis, las tierras de Laureles fueron estimadas en doscientos y treinta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos. Así mismo consta de autos que en el año de mil ochocientos veintitres, valian los terre-

nos trescientos mil pesos. Así pues aproximadamente recibió el Sr. Michelena trescientos diez y seis mil pesos en valores pertenecientes al Concurso.

Del justiprecio corriente en la foja diez y seis del cuaderno Y. X. aparecen las haciendas valorizadas en doscientos mil novecientos sesenta y ocho pesos, á veintidos de Setiembre de mil ochocientos treinta y ocho, como consta de la foja 224. vta. resultado muy distinto del que aparece en la foja 111. de ciento setenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos, á veintisiete de Enero del mismo año. Hay tambien suma diferencia en el cálculo de las mejoras hechas por el Sr. Michelena, pues en la foja 111. vta. y 112 importan setenta mil novecientos veinticinco pesos, seis reales ocho granos, y en la 225 vta. diez y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos ochenta y ocho centavos. Así pues es punto de difícil averiguación si realmente ha habido ganancias ó pérdidas en la compañía, sin que de esto nadie sea responsable sino el mismo Sr. Michelena que no hizo valuar los bienes raíces que recibió, como parece debió hacerlo, según la cláusula 2ª del contrato, que no limita la obligación de haber recibido por inventario solo los bienes muebles y semovientes.

La cláusula tercera tampoco fué cumplida por el Sr. Michelena; pues nunca hizo constar como en ella se previene, ni por medio del Juez ni de otro modo; la introducción de los veinte mil pesos. Sobre su cumplimiento se le hicieron varios reclamos constantemente y en diversos tiempos, como de autos consta.

En la Junta de acreedores de cuatro de Enero de mil ochocientos cuarenta y cuatro, se aprobó el dictamen del Sr. Lic. D. Juan Bautista Ceballos, en el que entre otras cosas, se declara: "que ningún carácter legal tenía ya la Junta menor que componían en México, D. Pedro Fernandez y Licenciados D. An-

gel María Salgado y D. Mariano Dominguez, cuya liquidación que hicieron con el Sr. Michelena respecto de la compañía no debía aprobarse.

Nunca llegó el Sr. Michelena á presentar las cuentas de la Sociedad, que se dió por terminada en mil ochocientos cuarenta y siete, después de haber pasado diez años en continuas disputas con los acreedores sobre la rendición de aquellas. Las que exhibió, según el testimonio del Sr. Ausorena, que nadie contradujo en las Juntas, eran simples apuntes propios del administrador de Laureles y no del socio del Concurso.

Por fin se refiere que hubo un Sr. Moran que las vió, y sobre su fé descansa el crédito exorbitante que hoy reclama la testamentaria del Sr. Michelena. Así pues es dudosa su existencia, apoyándose en la diversidad de precios dados en distintas épocas á los terrenos y casas de Laureles, en la falta de rendición de cuentas en la de la formación de inventarios que debieron preceder y seguir á la administración del Sr. Michelena, y en la no introducción de los veinte mil pesos que debió hacer constar que ingresaban á la Compañía, como fondo de ella. Sobre tan deleznable bases no puede fundarse un fallo judicial. No hay necesidad de detenerse en demostrar que en el contrato de sociedad deben ser guardadas las reglas de duración, administración y partición puestas por los socios á la celebración del convenio; de modo que solo en defecto de su voluntad expresa hay lugar á las disposiciones legales (L. 3. tit. 10. Part. 5ª)

Tampoco hay necesidad de probar que el crédito de que nos venimos ocupando no es refaccionario, cuando las leyes 26 y 28 del tit. 13 part. 5ª son bastante explícitas sobre los únicos casos en que un acreedor adquiere tan envidiado título. Estas leyes constituyen una hipoteca legal privilegiada á favor del que prestó dinero para edificar ó repa-

rar un edificio ó nave, tripularla, ó mantener á la tripulación, si se empleó en ella: casos que ni remotamente guardan analogía con el contrato de Sociedad cuya relacion se ha hecho. Por lo demas, no pudo ser mas crítica y perjudicial la posicion en que dejó á la Hacienda Pública el Sr. Michelena, disponiendo francamente de sus intereses despues de haberla expoliado de la administracion de las fincas concursadas. El trascurso del tiempo no ha podido legalizar lo que en su principio fué vicioso. *Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere* (L. 29. D. de divers. reg. Jur. antiq.).

Así, la Hacienda pública no puede reconocer derechos en el Sr. Michelena, dimanados de hechos á que fué del todo ajena. Puede únicamente concederle el carácter de simple depositario de las Haciendas de Laureles, que él mismo se tomó en la citada comparecencia de catorce de Junio de mil ochocientos treinta; ó bien el de administrador de bienes ajenos sin la voluntad de su dueño. Por el primer título está obligado el albacea del Sr. Michelena á restituir las cosas que este recibió, sin poderlas retener á título de compensacion por deuda, ó despesas, que pedirá separadamente [L. L. 5, y 10. tit. 3º part. 5ª] igual obligacion tiene respecto de los frutos de la cosa de que se constituyó depositario el Sr. Michelena.

La ley ha creado obligaciones indispensables para mantener el orden social, aunque no haya precedido convencion; por que los pactos no son suficientes á regularlas todas, y á penetrar en el porvenir y preveer todas las contingencias. Estas obligaciones pueden ser consideradas, ó como que provienen solo de la autoridad de la ley, ó como teniendo por causa un hecho personal lícito. Tal es la administracion de los bienes ajenos sin mandato, que produce obligaciones recíprocas entre el dueño de los bienes

y el que se encarga de su cuidado. El que voluntariamente y sin mandato se pone á administrar los negocios de otro, contrae el deber de continuar en su encargo ó incidencias hasta que el dueño pueda proveer lo conveniente; y se somete á dar cuentas y á todas las obligaciones que un mandato expreso le impondría. (L. L. 31 y 32 tit. 12 part. 5ª) El dueño á su vez debe admitir en cuenta los gastos necesarios y los útiles. (L. 27 y 28, tit. 12 part. 5ª) Bien pudiera aplicarse lo dicho á la administracion del Sr. Michelena por parte de la Hacienda Pública con quien jamas contrajo sociedad; pero obsta para ello la condicion de la Ley 29, tit. 12 part. 5ª que dice: Con buena intencion se deben mover los omes á recabdar las cosas ajenas, con voluntad de fazer plazer á aquellos cuyas son, ó non por cobdicia de ganar;... en aquello que recabdaren. Que la intencion del Sr. Michelena fué la de ganar lícitamente es indudable; pero la ley opone esta voluntad á lo que llama en el caso buena intencion.

Lo que se quiere llamar juicio de contadores no es sino del contador Morán sin que esté aprobado por el Juez que conoció de los autos, si no es con restricciones que hace nula la semejante aprobacion. En consecuencia carece de los requisitos que las leyes 1ª y 24, tit 21 Lib. 4 de la Recopilacion exigen para que sea válido ese juicio que con solo llamarse uniforme indica la necesidad de la intervencion de dos personas.

Si como se pretende, existe un capital extraño en la Hacienda de Laureles es justo dejar á salvo los derechos de su dueño para reclamarlo, prévia la devolucion de las fincas y de los diez y seis mil pesos de llenos que en depósito recibió; así como de sus productos, deducidas las expensas; pero no se quiera por esto que la hacienda pública que tenia en su poder fondos suficientes para ser pagada, sea pospuesta en los bienes del Concur-

so, á un tercero que la perjudicó, y con quien jamas contrajo.

En este concepto, por extraviadas que fueran las opiniones que se quisiesen adoptar, no se encontraria una que nos autorizara para obligar al Erario público á que pasase por contratos, arreglos y liquidaciones, en que no intervinieron sus representantes. Antes bien debe tenerse presente, que todas esas transacciones fueron obra del Sr. Michelena que indujo á los acreedores á que convinieran extrajudicialmente con él y entre sí, precisamente con el objeto de alejarse de los jueces de Distrito. Así se explica, porque aun la liquidacion del Sr. Morán se halla extendida en papel simple, circunstancia que por sí sola basta para que no haga fé en juicio.

Se ha negado la jurisdicción al Tribunal para conocer de este incidente, que se dice no ha sido tratado en primera instancia. ¡Como si en los agravios hechos en la sentencia graduatoria no sobresaliera el de haber colocado, en primer lugar, como refaccionario ese crédito! ¡Como si existieran obligaciones, cuyos contrayentes estuvieran colocados sobre de la misma ley! Es indudable que en todo juicio, sea universal ó particular, se celebra un cuasi contrato entre los que en él intervienen, por el que quedan obligados á pasar por las decisiones del juez de los autos, á quien toca calificar su jurisdicción. "*Judicis est aestimare an sit sua jurisdictio.*" (L. 5. D. de Judiciis).

Como en la primera instancia de este juicio se conformó el Promotor fiscal del Estado de Michoacan, con la sentencia graduatoria, no parece fuera de propósito, traer á colacion la ley 19, tít. 22 part. 3ª, por la que se exceptúa el fisco de la regla general, segun la que pasa en autoridad de cosa juzgada, toda sentencia consentida por las partes. Y aun cuando así no fuese, el Promotor de esta segunda instancia, ha hecho uso del reme-

dio de adherirse á la apelacion de sus contrarios.

D. José Suarez de Figueroa, en su tratado de *Jure adherendi*, cap. 7º establece sólidamente que el derecho de adherirse á la apelacion, no está limitado al tiempo en que debe esta interponerse, y en el capítulo 8º se demuestra que puede y debe hacerlo el interesado ante el Juez superior en el primer escrito que presente, respondiendo y contestando á la pretension del apelante.

Lo mismo enseña el conde de la Cañada usando de los términos siguientes: "Traidos los autos á expensas del apelante al tribunal del Juez superior, los toma aquel, y propone los agravios que ha concebido en la sentencia del Juez inferior y las causas en que intenta justificarlos para que se enmienden.

De este escrito se dá traslado á la parte que no apeló, y respondiendo á el se adhiere á dicha apelacion, pretendiendo que la sentencia se confirme en los capítulos que expresa, y le fueron favorables, y que se estime y declare por nula, de ningun valor, ni efecto, ó revoque como injusta en las partes que le fué perjudicial, señalándolas con ampliacion á la condenacion de costas omitida en la sentencia, y á las que se causaren en la instancia de apelacion.

Esta es la forma que observan las partes por uso y práctica comun de los tribunales; por ellas se confirma ser este el tiempo preciso en que se debe usar del derecho y facultad de adherirse á la apelacion contraria y oponerse en su consecuencia á lo juzgado en la parte en que lo considere gravoso, pidiendo se enmiende y reponga declarándola á su favor, segun y como lo pretende y solicita" (Cañada, juicios civiles p. 2. c. 7º)

En vista de todas las observaciones que se han hecho en este informe, el Promotor fiscal pide: 1º: se confirme la sentencia graduatoria de primera instancia en la parte que declaró estar

compensado el capital de cuarenta mil pesos que la extinguida Inquisición prestó á Doña Ana Josefa de Estensoro, con igual suma que aquel tribunal tomó de los fondos del concurso de Peña y Madrazo, para imponerlos en el Consulado de Veracruz, así como en lo que toca á la devolución que se mandó hacer al Sr. Vallejo de lo que hubiese dado por redención de ese capital: 2º: se revoque la misma sentencia en la parte que declaró no importar la época en que se verificó la compensación; mandando se consideren para su pago los diez y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos noventa centavos que por réditos de ese capital se deben á la Hacienda pública federal: 3º: que se coloquen inmediatamente después del adendo de costas del Lic. D. Ignacio Guerra Manzanera, que debe ocupar el primer lugar, las imposiciones hechas antes del veintiocho de Abril de mil setecientos ochenta y cinco por el orden de sus fechas, según su respectiva antigüedad: 4º: que en seguida se dé lugar á los diez y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos, noventa centavos referidos: 5º: que acto continuo se consideren los dos mil cien pesos de los legados piadosos que dejó Doña Ana Estensoro: 6º: que colocados por sus fechas los demás créditos que tienen constituida hipoteca especial y expresa, se le dé lugar al de cinco mil quinientos diez pesos que pertenecieron al Juzgado de testamentos de Valladolid: 7º: que después de satisfecho este

crédito, último de los pertenecientes á la Hacienda federal sean puestos los del Sr. Vallejo por pago de alcabalas y derechos fiscales que suplió la Inquisición: 8º: que se dejen á salvo los derechos de la testamentaria del Sr. Michelena para que los deduzca en la vía y forma que haya lugar contra quien corresponda, por el capital que reclama como suyo, previa la devolución de las fincas depositadas, sus frutos, y llenos que recibió aquel como depositario.

Parccerá extraño que habiéndose dirigido la defensa de la Hacienda pública al principio de la actual instancia, por el Sr. Licenciado D. José García Aguirre, no se haya seguido puntualmente el camino trazado por este distinguido letrado; pero él no puede examinar con la detención necesaria estos voluminosos autos, para descubrir todos los graves errores que contiene la sentencia, cuya enmienda esperan con tranquilidad los acreedores escarnecidos, confiando en la justicia de su causa y en la bien conocida ilustración de V.

Querétaro, Febrero 11 de 1871.—*Luis Castañeda.*

Otro si dice: que acompaña el promotor un estado que manifiesta los créditos de la Hacienda Federal, en su relación con los principales que forman el concurso de Laureles. Fecha ut supra.—*Castañeda.*

Es copia que certifico. Querétaro, Febrero 15 de 1871.—*Luis Castañeda.*

Estado de los créditos pertenecientes al Fisco en su relacion con los demas que forman el Concurso de Laureles, con expresion de sus réditos y lugar que deben ocupar en la sentencia graduatoria.

SEMANARIO JUDICIAL.

ESCRITURAS	REGISTROS	CAPITAL	RENTAS	CALIFICACION	Saldo general	Réditos pagos	Que se adeudan	REPRESENTANTES ACTUALES	BUENOS ACTUALES
		3,577 75		Personal privad ^o	3,577 75			D. I. Guerra Manzanaruz	Sus herederos.
221 de Mayo 1815.		2,000 00	5 p ^o	Hipotecario.	5,904 04	2,095 06	3,804 04	Capellan J. F. Perez.	Hacd ^a púb ^a federal.
312 de Nobre. 1622.	Marzo 6 de 1633.	2,000 00	"	id.				S. Francisco de Morelia.	D. José Vallejo.
422 de Mayo 1640.	Mayo 9 de 1735.	2,000 00	"	id.	10,454 80	5,600 02	6,454 80	D. Vicente Rojas.	id. id.
5 id. id.	id. id.	4,000 00	"	id.				D. Mariano M. de Castro	Hacd ^a púb ^a federal.
619 de Nobre. 1690.	Setbre. 5 de 1693.	1,500 00	"	id.				Juzg ^o de Testam ^o México	D. José Vallejo.
723 de Dibre. 1722.	Nobre. 4 de 1724.	1,530 00	"	id.				S. Juan de la Penitencia	id. id.
85 de Mayo 1738.	Mayo 9 de 1738.	4,000 00	"	id.	10,223 34	6,750 92	6,223 34	D. Juan J. Chavez.	Hacd ^a púb ^a federal.
9 id. id.	id. id.	750 00	"	id.	3,139 02	785 98	2,389 02	D. José Antonio Castro.	id. id.
10 id. id.	id. id.	300 00	"	id.	1,268 11	314 39	968 11	Cofradía de Zitácuaro.	id. id.
11 id. id.	id. id.	100 00	"	id.	422 71	104 79	322 71	id. id.	id. id.
12 id. id.	id. id.	3,000 00	"	id.				D. Antonio Paniagua.	D. José Vallejo.
136 de Mayo id.	id. id.	1,100 00	"	id.	3,247 23	1,162 77	2,147 23	Sta. Teresa la Antigua.	Hacd ^a púb ^a federal.
14 id. id.	id. id.	4,000 00	"	id.	9,225 23	5,674 76	5,725 22	Carmelitas de México.	id. id.
15 id. id.	id. id.	500 00	"	id.				Monast ^o de Monserrate.	D. José Vallejo.
16 id. id.	id. id.	2,300 00	"	id.				Hospital de dementes.	id. id.
173 de Nobre. 1758.	Nobre. 6 de 1758.	4,000 00	"	id.	9,225 23	5,674 76	5,725 22	Carmelitas de México.	Hacd ^a púb ^a federal.
1823 de Abril 1785.	Mayo 7 de 1785.		"	id.	17,883 90		17,883 90	La Inquisicion.	id. id.
1919 de Setbre. 1799.	Oebre. 18 de 1799.	2,100 00	"	id.				St ^a Teresa y S. Fran ^o Zit ^a	id. id.
208 de Agosto 1799.	id. 9 id.	40,000 00	"	id.				Hijos de D. Pedro Otero.	
2118 de Setbre. 1799.	id. 18 id.	24,100 00	"	id.	20,807 00	21,846 00		Sras. Gonzalez Guerra.	
2231 de Julio 1801.	Agosto 3 de 1801.	3,000 00	"	id.				D. Vicente Varela.	
2326 de Nobre. 1801.		4,000 00	"	id.				D. Juan M. Corral.	
2421 de Febró. 1798.	Febró. 21 de 1798.	5,510 00	"	Hipotec ^o gral.				Juzg ^o de Testam ^o Morelia	Hacd ^a púb ^a federal.
25 Rec ^o 22 Nov. 1803.		1,317 47	"	id. legal.				La Inquisicion.	D. José Vallejo.
26 id. 12 Junio 1804.		2,853 40	"	id. id.				id. id.	id. id.
2712 de Agosto 1796.		53,151 00	5 p ^o	Escriturario.				D. Andrés Gil Torres.	
287 de Setbre. 1796.		44,456 00	"	id.				Cofradía de Aranzazu.	
2928 de Julio 1797.		1,146 00	"	id.				Vecinos de Maravatio.	
3011 de Agosto 1847.		Líquido.				93,938 37		Gral. J. Mar ^o Michelena	D. José Vallejo.

Nota.-Los réditos están liquidados hasta 11 de Octubre de 1869, con deducción de los once años de la guerra de Independencia y de las contribuciones causadas hasta aquella fecha, por el promotor del Juzgado de Distrito.

Querétaro, Febrero 15 de 1871.

Luis Castañeda.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO.

Tribunal de Circuito de Celaya.—En Querétaro.—Querétaro, Marzo 3 de 1871. Vistos: la hacienda de "Laureles" y sus anexas, llamadas Buenavista, Guadalupe, Santa Ana y Barranquilla situadas en jurisdicción de San Juan Zitácuaro, del Estado de Michoacán, de las que fueron dueños D. Vicente Gonzalez Guerra y Doña Ana Josefa Estensoro, por remate que hicieron de ellas con motivo del fallecimiento de Doña Teresa Bernal de Ostete, reconocian distintos créditos pasivos dejados por esta última que expresó en su testamento y memoria otorgada en México á doce de Febrero de mil setecientos cincuenta y siete, mediante su apoderado Doctor D. Ignacio Cevallos, chantre de la catedral de aquella ciudad cuyos créditos se aumentaron cuando la citada Estensoro quedó al frente de las haciendas con motivo del fallecimiento de Gonzalez Guerra, entre los que se cuenta la cantidad de cuarenta mil pesos que el Tribunal de la Inquisición facilitó á censos en veinte de Abril de mil setecientos ochenta y cinco, á razón del cinco por ciento anual, y bajo hipoteca de las haciendas que se registró en treinta del mismo mes y año, las que pasaron en venta que celebraron los herederos de la Estensoro en diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve á D. Juan de la Peña Madrazo quien se obligó á reconocer los créditos enunciados que se referian sucesivamente á continuación, los que aseguró también con hipoteca registrada en Zitácuaro á diez y ocho de Octubre del mismo año; y á mas de los créditos que reconocian las haciendas, se les gravó por el nuevo dueño con otros, entre los que se cuenta el de unas alcabalas que no se pagaron cuyo valor se liquidó en ocho de Julio de mil ochocientos dos, por lo que se

puso demanda ejecutiva por la administración de rentas de aquella villa, lo que provocó el Concurso necesario á que concurrieron otros acreedores de plazos cumplidos que tenía Peña Madrazo, dirigiéndose unos ante el subdelegado de Zitácuaro, y otros ante uno de los alcaldes mayores de la ciudad de México, lo que motivó competencia de jurisdicción para conocer por esos funcionarios, que se resolvió por el Virrey Iturrigaray en Setiembre de mil ochocientos tres á favor del Tribunal de la Inquisición de México, que era también acreedor según antes se había dicho, cuyo Tribunal ofreció pagar lo que resultase líquido en alcabalas; con lo cual cesó la injerencia que tuviese el juez ordinario de Zitácuaro, continuándose los trámites del juicio de Concurso que había comenzado, por requerimientos ante el citado Tribunal en diez y nueve de Julio de mil ochocientos dos, subsistiendo el embargo de las haciendas decretado en ocho de Octubre del mismo año.

El juicio de que se ha hecho mérito seguido con interrupciones de tiempos entre distintas personas que han cooperado á su objeto, mediante los poderes respectivos, con escrituras y títulos de capellanías, incidentes sobre pagos de réditos que devengarán los capitales, los relativos á contratos de compañía que celebraron los acreedores, y otras diligencias entre las que se cuenta como parte integrante las practicadas á solicitud del Consulado del Comercio de Veracruz que pretendió de la Inquisición la cantidad de setenta y cinco mil pesos y otros incidentes, que forman toda una voluminosa actuación compuesta de veinticuatro expedientes, con números de cerca de cuatro mil fojas, las que se han tenido á la vista por necesidad extrema, á efecto de resolver las distintas cuestiones de las partes que han intervenido, ya con derechos propios y como apoderados, entre los que se cuentan

por el orden de apelacion que interpusieron, los abogados que se expresan en seguida.

El C. Lic. Jacobo Ramirez apoderado general del C. José Vallejo por sus derechos propios: el de su clase Manuel Alvírez por el mismo Vallejo como albacea del general D. Mariano Micheles: el C. Lic. Joaquin Velasco apoderado de D. José Elías Fagoaga, Síndico del Concurso de D. Joaquin Gutierrez de los Rios y de los herederos D. Nicolás Campero, el C. Lic. Agustin García en representacion de D. Pantaleon Parrez cecionarios de los hijos de D. Pedro Otero: el C. Promotor Fiscal Luis Castañeda por los derechos de la Hacienda pública Federal, y el C. Lic. Angel Padilla como defensor nombrado de oficio por los acreedores ausentes que no se presentaron en primera instancia ni en la segunda de que conoce este Tribunal de Circuito.

Segun se decía, la injerencia del Tribunal de la Inquisicion en el presente juicio de Concurso, era por la declaratoria en su favor con respecto á la jurisdiccion que le disputó el juez de San Juan Zitácuaro, y en esta intervencion habia continuado á no haberse extinguido aquel tribunal en mil ochocientos veinte, en cuya época tuvo su verificativo en México el decreto de las cortes españolas fecha 26 de Enero de 1813 lo que motivó que el negocio del Concurso en el estado en que se hallaba, se radicase ante el juez de Hacienda de la capital de la República, á cuyo funcionario se les suscitó tambien competencia por el C. juez de Distrito de Michoacan que reclamó fuera por razon de domicilio, en razon que en su territorio se hallaban ubicadas las fincas concursadas, cuya competencia se resolvió por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en once de Noviembre de mil ochocientos veintinueve en favor del juez de Michoacan cuyo funcionario se abocó en el conoci-

miento del negocio siguiendo sus trámites hasta pronunciar sentencia de graduacion, despues de haber dejado en libertad á los acreedores para que entre sí arreglasen el modo y términos en que se pagasen sus créditos contados en las facultades que le otorgara el C. Lic. Bruno Patiño, á efecto que como Síndico del Concurso, formase la cuenta respectiva, sin que por eso se eliminara á la autoridad judicial de sus facultades propias para conocer en el negocio de concursos necesarios, relativo á su jurisdiccion como por intervenir créditos fiscales que por sus privilegios no se habian podido poner á la vista y resolucion de particulares, sino previa la autorizacion superior, razon porque hubo obligacion para que los acreedores sujetaran sus acuerdos á la aprobacion de la autoridad consecuentes con las razones aducidas en junta de siete de Junio de mil ochocientos treinta, cuya escritura relativa se otorgó en catorce del mes citado (cuaderno 87 fs. 12 vta.) y por las razones que adujeron en la junta de primero de Junio de mil ochocientos cincuenta y dos.

En la presente sentencia relativa á los puntos sentados sobre el valor de los créditos y su graduacion, como á los de apelacion que se introdujeron segun se ha dicho antes, tiene que referirse circunstanciadamente para mayor claridad é intelijencia la procedencia de aquellos, su valor, categoría en escala que designa la ley á efecto de aplicarlos en la que les corresponde.

Segun se ha dicho antes en el primer párrafo, se hace mérito someramente del contrato que celebrara con Madrazo consistente en la venta de la hacienda de Laureles. El precio de esa finca y sus anexas fué el de ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y un pesos cinco reales, cuatro y medio granos, siendo las vendedoras Doña Ana Félix, Doña María Antonia y Doña María

Gertrudis Gonzalez de la Guerra de cuya suma quedó reconociendo el comprador sobre las fincas, setenta y dos mil setecientos veinte pesos cuatro reales que gravitaban en ellas con censos é hipotecas antiguas: dos mil cien pesos de obras pías, y seis mil ciento trece pesos que importaban las deudas pasivas de las haciendas, sobre cuyo precio de la finca se dieron por recibidas las vendedoras, de la cantidad de setenta mil setecientos cincuenta y siete pesos seis reales, cuatro y medio granos, según aparece en escritura de diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve, quedando el comprador obligado á reconocer los créditos enunciados que, como se ha dicho, se hallaban impuestos con anterioridad. Dueño Madrazo de las haciendas, contrajo nuevos créditos sobre ellas, que dieron lugar al Concurso en cuyo estado se celebró contrato de compañía, con respecto al giro de aquellas; otorgándose al efecto, escritura en diez y siete de Julio de mil ochocientos treinta [cuaderno 88] con el general D. José Mariano Michelena: así es que, en el Concurso figuran las tres clases de créditos siguientes: 1º Censos é hipotecas de antigua imposición, anteriores al diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve: 2º los posteriores causados por el dueño comun Peña y Madrazo, hasta Julio de mil ochocientos dos, y 3º el reclamado por la parte de Michelena desde Julio de mil ochocientos treinta hasta Abril de mil ochocientos cincuenta y uno.

Los censos é hipotecas primitivas fueron:

1º El capital de dos mil pesos que impuso D. Alonso de Solórzano, con el cinco por ciento anual, por escritura de veintiuno de Mayo de mil seiscientos quince sobre la hacienda de los Laureles, cuyo capital formó la capellanía que reconoció D. Juan Chavez Osorio, dueño de esa finca, por escritura de veintiuno

Tomo III—Parte II.

de Junio de mil setecientos catorce, registrada en México á tres de Julio del mismo año.

2º El de dos mil pesos con rédito, é hipoteca como el anterior bajo escritura, fecha doce de Noviembre de mil seiscientos veintidos, otorgada en Morelia por el citado Solórzano á favor de D. Jorge Baez Julian, quien fincó el censo en dote de capellanía aceptada por el convento de San Francisco de esa ciudad en cinco de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho, cuyo crédito, lo mismo que el anterior lo reconoció D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra, el primero por escritura de veintiocho de Abril de mil setecientos cincuenta y nueve otorgada en Tuzántla y que no se registró, y el segundo, en cinco de Mayo referido que se registró por la hipoteca que contiene el diez de Mayo del año de mil setecientos cincuenta y ocho, cuyos capitales son representados en el Concurso por el C. José Vallecjo en lo personal.

3º El capital de cuatro mil pesos de la capellanía fundada por D. Domingo Gonzalez sobre la Hacienda referida, pues aunque se designaron seis mil pesos para una imposición, solo empleó el albacea de Gonzalez la cantidad primera y reservó los dos mil pesos que completaban la segunda á los bienes patrimoniales del testador, lo que consta por escritura de reconocimiento que otorgó en México el C. Lic. D. Juan de Barrientos en veintidos de Mayo de mil seiscientos cuarenta, que también reconoció Gonzalez Guerra con hipoteca estendida el cinco de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho que se registró el diez del mismo mes y año, cuyo crédito de cuatro mil pesos lo representa en la actualidad el Erario Federal.

4º El de dos mil pesos de capellanía conocida de Doña Juana Cuadro invívito en la escritura anterior que otorgó á Barrientos en el mismo año y cuyo

capital reservó su albacea por haber tomado el capital de la Cuadro, Doña Teresa Bernal de Ostete, fincándole en la hacienda del presente Concurso cuando estuvo al frente de la testamentaria su marido D. Juan Chavez Osorio, cuyo capital fué tambien de los comprendidos y reconocidos por el antes citado Gonzalez Guerra en la fecha de Mayo del año referido.

5º El capital de mil quinientos pesos de la capellanía fundada por D. Blás Hernandez Vargas y su mujer María Espinosa, con escritura hipotecaria de la hacienda de Laureles y anexas otorgada en diez y nueve de Noviembre de mil seiscientos noventa, cuyo valor se reconoció y no mas, desde que se remató judicialmente la hacienda del Zapote en veintiseis de Agosto de mil setecientos trece, con cuya cantidad continuó la capellanía expresada.

6º El capital de mil quinientos pesos que perteneció al ex-convento de religiosas de San Juan de la Penitencia de México, censo de imposición antigua que fué reconocido sucesivamente por D. Angel Gonzalez de Tagle y la Ostete por escritura de veintitres de Diciembre de mil setecientos veintidos, hecha en México, la que se registró en veinticuatro de Noviembre de mil setecientos veinticuatro; cuyos tres créditos de que hacen mérito los artículos 4º y 5º y el presente, son representados por el C. Vallejo en lo personal.

7º Fueron tambien reconocidos por escritura de cinco de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho por el mismo Gonzalez Guerra sobre las haciendas Laureles y sus anexas, á mas de los censos anteriores, cuatro mil pesos dote de la capellanía de D. Juan José Chavez: setecientos cincuenta id. de la del Br. D. Juan Antonio Cardoso: trescientos pesos de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de Zitácuaro: cien id. para el aceite de la lámpara de la

misma Parroquia, y tres mil pesos de la capellanía de D. José Antonio Paniagua, cuya escritura se registró en diez de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho, y éstos capitales los representan, los cuatro primeros, la Hacienda Federal y el último el C. Vallejo entre sus derechos personales.

8º El capital de ocho mil pesos que fué de los carmelitas de San Sebastian de México, de dos legados que dejó para bien de su alma la Sra. Ostete, cuya cantidad reconoció D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra, en escritura hipotecaria especial sobre las haciendas de Laureles, otorgada en aquella ciudad el seis de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho, que se registró el diez del mismo mes y año, cuyo crédito pertenece en la actualidad al Erario Federal.

9º Reconoció tambien el citado Gonzalez Guerra en la relacionada escritura de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho, á mas de los legados que fincó la Sra. Ostete, mil cien pesos á favor del ex-convento de religiosas de Santa Teresa la antigua de México, quinientos id. al Monasterio de Monserrate y dos mil pesos al Hospital de mujeres dementes de aquella capital, todos con hipoteca, y cuyos créditos representa: el primero el Erario Federal, y los dos restantes el C. Vallejo en lo personal.

10º El capital de cuarenta mil pesos de que al principio se hizo mérito que prestó la extinguida Inquisición á Doña Ana Estensoro, á censo consignativo redimible al cinco por ciento anual sobre las Haciendas enunciadas, bajo escritura de veintiocho de Abril de mil setecientos ochenta y cinco, registrada en la Notaría de secuestros de Morelia á once de Agosto del mismo año, y en Zitácuaro en diez y siete del mismo mes y año citado, cuyo capital lo ha representado en el concurso el citado Vallejo.

11º El crédito de ciento cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un pe-

ses seis reales que D. Juan Peña Madrazo contrajo á favor de D. Andrés Gil de la Torre, vecino de Veracruz, cuando aún no era dueño de la Hacienda de Laureles y sus anexas, asegurándolo con fianzas de D. Patricio Saenz, D. Juan Gomez de la Secada, D. Francisco Blanco de la Lota y D. José Antonio del Rio, con obligacion de pagarla á los seis años con abono de veinte mil pesos en cada uno de ellos, y el resto en el último, cuyos abonos hizo el deudor en los cuatro primeros años, y los fiadores el relativo al quinto, retirando la fianza; en cuya virtud se quedó debiendo á Gil de la Torre cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un pesos seis reales, y veinte mil á sus fiadores, sobre cuyos créditos no aparece en los autos la escritura á favor de la Torre ni el lasto á favor de los fiadores no consta si fuesen hipotecarios y cuyos créditos aparecen en el Concurso, encomendados al ciudadano defensor de ausentes nombrado en el juzgado de Distrito de Michoacan.

12º El capital de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos tres reales y medio al cinco por ciento anual con plazo de cinco años que solicitó D. José de la Lama el siete de Setiembre de mil setecientos noventa y seis, de la Mesa de Aranzazu de San Francisco de México, dando por fiadores de las obligaciones de ese contrato á varias personas y entre ellas á D. Juan José Echarte, y á D. Juan Peña Madrazo, cuya solicitud se despachó favorablemente el veinte y siete de Junio del año siguiente, en cuyo crédito se subrogó el citado Peña Madrazo, en lugar de Lama, y aceptada esa subrogacion quedó constituido deudor de aquella cantidad que se pagó por los fiadores: siendo de notar, que la escritura de obligacion no fué hipotecaria ni registrada y cuyo crédito ha sido representado en el Concurso por Doña Josefa Peña; sucesora de los derechos de la hija de Pe-

ña Madrazo por compra que ésta hiciera á los fiadores.

13º El crédito de ciento ochenta y ocho pesos tres reales que importaron los réditos del capital precedente que pagó D. Antonio de la Hoz como fiador de ellos por Madrazo á Aranzazu, que produjeron el capital enunciado con cuyos motivos se subrogó en los derechos de la cofradía, con el carácter de acreedor escriturario por falta de hipoteca ú otro privilegio, y cuyo crédito lo representa el defensor de ausentes.

14º El de cinco mil quinientos diez pesos pertenecientes á varios ramos de capellanías y obras pías que el juzgado de testamentos de Morelia prestó el dos de Febrero de mil setecientos noventa y ocho, á Peña Madrazo, quien en esa fecha era arrendatario de Laureles; notándose que aunque Madrazo pidió seis mil pesos, solo se le facilitó la cantidad enunciada al cinco por ciento por un año que se aseguró con la escritura otorgada en la fecha del mismo, con hipoteca de los llenos, aperos y existencias de las haciendas, cuyo crédito lo representa en el Concurso el Erario Federal.

15º El de mil ciento cuarenta y seis pesos que en veintiocho de Julio de mil setecientos noventa y siete y bajo escritura sin hipoteca de la misma fecha consiguió Peña Madrazo en préstamos que le facilitó D. Tomás Pascual Díaz; la que tenía en depósito perteneciente á los vecinos de Maravatío que habían reunido para hacer un puente, y cuya cantidad debía volver el deudor luego que la pidieran, la que es representada en el Concurso por el defensor de ausentes.

Los capitales enunciados en los artículos precedentes se debían, segun se ha dicho, antes que Madrazo fuese dueño de las haciendas de Laureles y sus anexas, acerca de las que otorgaron promesa de venta, en México el treinta y uno de Enero de mil setecientos noventa y

ta y nueve, Doña Ana Félix, Doña María Antonia y Doña María Gertrudis Gonzalez de la Guerra, ante el escribano D. José Murillo, á favor del citado Madrazo, por precio de ciento cincuenta y un mil seiscientos cincuenta pesos cinco reales, cuatro y medio granos, haciendo declaratoria sobre que el comprador era dueño desde aquella fecha de las fincas anunciadas, absteniéndose de otorgar escritura de venta por falta del certificado del cabildo que acreditase los gravámenes que tuviesen aquellas, y poder hacer el pago de la alcabala respectiva. Desde entónces, y mediante aquel contrato, contrajo Madrazo distintos negocios que gravaron las haciendas con otros capitales que son los siguientes:

1º El de cuarenta mil pesos con plazo de tres años y al cinco por ciento anual de réditos y con hipoteca especial de las haciendas de los Laureles y sus anexas que D. José Antonio del Mazo, vecino de Guanajuato, y como curador de los menores hijos de D. Pedro Luciano Otero prestó á Madrazo el ocho de Agosto de mil setecientos noventa y nueve, obligándose á la vez el deudor á acreditar dentro de cuatro meses no deber á las señoras Gonzalez Guerra cantidad alguna como precio de las haciendas que le vendieron, cuyo contrato se ratificó otorgándose la escritura de venta el diez y ocho de Setiembre del año citado, que llevó á efecto el celebrado con el curador de los Oteros, cuya escritura relativa de ocho de Agosto referido, se registró en México el veinte de Setiembre del mismo año y en el libro de becerros de San Juan de Zitácuaro el nueve de Octubre del año ya repetido: con lo que se remitió á Mazo el certificado que acreditó que las fincas no quedaban gravadas para con los vendedores por razon del precio de la venta, ó como parte de él. Ese crédito con su accion á los réditos vencidos y que se vencieron, los dividió la casa de Otero el año

de mil ochocientos veintiseis en dos partes, cediendo veinticuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos cuatro reales al Concurso de D. Joaquín Gutierrez de los Rios en abono de mayor cantidad de que le era deudor, y quince mil veinticinco pesos cuatro reales á D. Nicolás Campero, de que le era acreedor. Ese crédito que se expresa al principio, fué representado por el O. defensor de ausentes en primera instancia y en ésta por las partes relativas á sus poderes y por la cantidad que reclama.

2º El capital de veinte mil ochocientos siete pesos á que está reducido el que las Sras. Doña Ana Félix, Doña María Antonia y Doña María Gertrudis Gonzalez Guerra, prestaron á depósito irregular con plazo de dos años y al cinco por ciento anual de réditos y con hipoteca especial de las haciendas, Laureles y sus anexas, á Peña Madrazo, quien les otorgó la escritura relativa el diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve, ante el escribano D. José Murillo, registrada en el libro becerro de Zitácuaro el diez y ocho de Octubre del mismo año. Ese crédito es representado en el Concurso por el O. José Vallejo como albacea del General D. José Mariano Michelena.

3º El capital de dos mil cien pesos que impuso Doña Ana Josefa Estensoro dividiendo esa cantidad del modo siguiente: mil pesos para que con sus réditos y al cinco por ciento anual, se hiciera una fiesta anual á la Virgen de Zapópan, y los mil cien restantes para que con igual pension de réditos se dijese misas en la Iglesia de S. Francisco de S. Juan Zitácuaro, cuyas obligaciones expresadas aceptó Madrazo cuando compró las haciendas, y al efecto otorgó la escritura de imposición hipotecaria especial de ellas en diez y nueve de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve que se registró á diez y ocho de

Octubre del mismo año cuyo crédito lo representa el Erario Federal.

4º El capital de tres mil pesos que perteneció á D. Manuel Ramon Perez y luego á Vicente López Varela, vecinos de esta Ciudad, cuya cantidad obtuvo Madrazo del primero, á depósito irregular con plazo de tres años al cinco por ciento anual y con hipoteca especial de Laureles, se otorgó la escritura en treinta de Julio de mil ochocientos uno, y se registró en Zitácuaro el tres de Agosto del mismo año, cuyos derechos se cedieron á Varela en Setiembre siguiente por escritura otorgada al efecto.

5º El de cuatro mil pesos que D. Juan Peña Madrazo Corral pagó en veintisiete de Noviembre de mil ochocientos uno á la Tesorería de la Inquisición por cuenta de D. Juan Peña Madrazo, tío de aquel, en pago de réditos de dos años que se debían á ese Tribunal provenientes del capital de cuarenta mil pesos que se reconocían, según antes se ha hecho mérito, y por cuyo entero se expidió á Corral recibo expresando la calidad de fiador de réditos por su tío citado.

6º El capital de tres mil quinientos setenta y siete pesos, setenta y cinco centavos sin réditos como el anterior, de los herederos de D. Ignacio Guerra Manzanares, causados en los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre de mil ochocientos dos por las costas que devengó como subdelegado en Zitácuaro en la 1ª instancia por las demandas introducidas contra Peña Madrazo y competencia de jurisdicción suscitada por uno de los alcaldes Mayores de la Ciudad de México, y cuyo crédito, lo mismo que los dos anteriores, es representado ahora por el C. defensor de ausentes.

7º El de mil trescientos diez y siete pesos tres reales por alcabalas liquidadas el último de Diciembre de mil ocho-

cientos tres, y que debía Peña Madrazo, cuyo crédito lo representa el C. José Vallejo entre sus derechos personales.

8º El crédito de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos tres reales, procedente de responsivas de guías á que se obligó el deudor comun Peña Madrazo á favor de la administración de Rentas de Zitácuaro que fueron liquidadas (las responsivas) el día treinta de Mayo de mil ochocientos cuatro, y cuyo crédito es representado por la misma persona que la anterior en lo personal.

9º El de mil ciento quince pesos que debía Peña Madrazo en mil ochocientos cuatro á D. Juan Ignacio Villanueva, vecino de esta Ciudad, que fué tenedor de veinticinco cargas de piloncillo pertencientes al primero cuando comenzó el Concurso.

10º El capital de mil ochocientos setenta y dos pesos que reclamó D. Juan Antonio Urrutia, vecino de esta Ciudad, á once de Abril de mil ochocientos cuatro al citado Madrazo por cuenta corriente, y cuyo crédito, lo mismo que el anterior, carece de justificantes.

11º El de mil ciento cincuenta y siete pesos de D. Vicente López Varela, que representó en el Concurso en el mismo mes de Abril de mil ochocientos cuatro, sin escritura.

12º El de trescientos veintiseis pesos tres y medio reales de D. Tomás Rodríguez, vecino de esta Ciudad, sin justificante como los anteriores, cuya cantidad debía Madrazo, dándose el acreedor por citado, para el Concurso, sin haber comparecido.

13º El de doscientos treinta y nueve pesos seis reales pertenecientes á D. Nicolás Gutierrez, vecino de Toluca, cuyo individuo no compareció al Concurso, á pesar de habérsele citado con el carácter de acreedor de Madrazo.

14º El crédito de setenta y ocho pesos seis reales de D. Nicolás de la Que-

va, á quien se le citó como los anteriores, sin haber comparecido.

15º Guardan la misma situacion que los tres créditos anteriores, los siguientes: Canónigo D. José Antonio Peña, por mil pesos: los herederos de D. Francisco Ignacio Pagola, por trescientos cincuenta y seis pesos: D. Pedro José de Lámbarri, por doscientos setenta y dos idem: D. Luis Castillo, por mil quinientos pesos: D. Juan Antonio Gutierrez de Teran, por setecientos noventa y ocho pesos: D. Vicente Rodriguez de Rubalcaba, por ciento cincuenta idem: D. Pedro Pardo, por mil doscientos setenta y cinco pesos: D. Pascual Tomás Diaz, por mil trescientos cuarenta y siete pesos cuatro reales: D. Miguel Félix Vargas, por setenta y nueve pesos dos reales: D. Blas García de la Cuesta, por dos mil cuarenta pesos: D. Tomás García Linarez, por seiscientos ochenta y seis pesos cuatro reales: D. Juan Madrazo Corral, por diez mil setenta pesos: D. Juan José Echarte, por dos mil idem: D. Juan Madrazo, por seis mil pesos: D. Francisco Jigafa, por cinco mil idem, y D. Pedro Gonzalez por mil pesos: cuyos créditos, lo mismo que los comprendidos en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14, son representados por el C. defensor de ausentes.

El considerable número de créditos expresados en el párrafo anterior, fueron causados por D. Juan Peña Madrazo desde el diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve, en cuya fecha compró la hacienda de los Laureles y sus anexas, hasta el ocho de Julio de mil ochocientos dos en que se inició el Concurso; mas tiene tambien que hacerse mérito consecuente con el plan de la parte expositiva de esta sentencia, del crédito de noventa y siete mil doscientos diez y seis pesos referente al contrato de compañía que el General D. Mariano Michelena, celebró con el Concurso el diez y siete de Julio de mil

ochocientos treinta; cuyo crédito se ha reclamado por el C. José Vallejo, como albacea del finado Michelena, alegando pertenecer á las utilidades de la compañía é incluido en ellas los veinte mil pesos que se asegura introdujera el socio á los bienes del Concurso.

La relacion de los créditos precedentes han comprendido las tres épocas en que se han contraído, que se han expresado segun el orden en que, á juicio del personal del Tribunal, se han reputado, tomando como por antecedente al efecto la antigüedad de sus fechas y años respectivos para mayor claridad, reputándose lo expuesto como proposicion mayor de donde tiene que partir la menor, consistente á las apreciaciones respectivas y luego la consecuencia ó la final resolucion con las proporciones correspondientes.

Considerando: que la parte del albacea de la testamentaria del finado general Michelena, ha alegado declinatoria de jurisdiccion al Tribunal de Circuito que reside en esta Ciudad, para conocer en grado de apelacion de la sentencia graduatoria del Concurso, que pronunció el C. Juez de Distrito de Morelia, el dia veintiocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve, en lo relativo á capital ó créditos de noventa y siete mil doscientos diez y seis pesos de la testamentaria, que fuera colocado en lugar preferente, exponiéndose al efecto de la declinatoria, que ese punto no se ventiló ni fué objeto de primera instancia, ni de la sentencia que en aquella se dictó; en cuyo caso no puede haber jurisdiccion en este Tribunal, puesto que no pudo delegársele lo que no existia: en que se ha aducido en segunda instancia la accion contra el crédito de la testamentaria de Michelena, promoviendo la fuerza de lugar y tiempo, en cuyo caso, y por cuanto se toca la jurisdiccion, es lo primero que debe dilucidarse por ser la base para conocer en las cuestiones subsiguientes.

Considerando: que la excepcion de incompetencia es extemporánea, y en contradiccion con lo que aparece en autos que pone de manifiesto todas las providencias que espontáneamente y sin contradiccion fueron ejecutadas, tanto en primera como en segunda instancia, ya por el O. Albacea de la testamentaria como por sus apoderados, Lics. Ramirez y Alvarez, sucesivamente, con cuyos hechos se demuestran otros muy importantes relativos, á saber:

I. Que el O. Albacea de Michelena no promovió su accion por cuerda separada, ni adujo su excepcion en tiempo y forma, sino que lisa y espontáneamente ocurrió al Concurso en union de sus acreedores, á efecto que la preferencia reclamada por aquel, la tomaran en consideracion, la que tenia que revisarse y aprobarse por el O. Juez de Distrito, en uso de sus atribuciones, en cuyo caso se sujetó á la parte de Michelena á la autoridad que pronunció la sentencia de la que interpuso recurso de apelacion que no habia instaurado, si nó contase con la jurisdiccion del Juez *á quo* y la de este Tribunal; á lo que se agrega, que suponiendo la falta de esta, se prorogó con aquel acto y otros sucesivos acaecidos en primera y segunda instancia.

II. Que con respecto á lo indicado en el párrafo precedente, aparece que el crédito que se reclamó por la citada testamentaria, se ventiló en primera instancia segun consta en el cuaderno núm. 181, desde la foja seis frente hasta la última del mismo denominado "corriente," con cuyos datos se tomó en consideracion, tanto por el síndico del concurso, como por el auto judicial relativo, reputando el crédito como del concurso que se dice los causó; en cuyo caso existe la causa, y por consiguiente el efecto.

III. Que con respecto á lo expuesto y tratándose de sostener con empeño por parte del O. Lic. Alvarez, negando jurisdiccion, esta la prorogó, segun se di-

jo antes, cuyo punto se repite para demostrar sus efectos que autorice para conocer en los negocios segun los prefijan las leyes 32, tít. 2º part. 3º, 20 lib. 4º de la misma, y 7º tít. 29 lib. 11 de la Nov. Rec., razon porque tiene que declararse, como realmente se declara, sentándose como preliminar á las cuestiones que siguen, la jurisdiccion para conocer y sentenciar, que ha tenido y tiene tanto el Juez de Distrito, como el Tribunal de Circuito.

IV. Que sin esa jurisdiccion no habria aprovechado la graduacion hecha en favor de Alvarez que ha tratado de sostener, en cuyo caso, lo que alega con respecto á aquella, es *contraproductum*, olvidando las facultades propias de la autoridad, de la que no se desprendió el Juez, cuando los acreedores, entre los que figuró el mismo Michelena, segun se vé en el cuaderno núm. 14, 6 antiguo, 23 fojas dos frente, se hizo proposicion para que los negocios del Concurso se arreglaran en lo particular entre los acreedores, "los que podian pedir al Juez de los autos la aprobacion," cuya jurisdiccion se le dejó expedita por aquellos en la acta de 30 de Julio de 1868, para acoger ó modificar y aun desechar el proyecto del síndico, segun se vé á fs. 60 frente del cuaderno 21 llamado corriente, con todo lo cual aparece demostrado la inferencia de la autoridad que le es propia por la naturaleza del Concurso, con intervencion de la persona fiscal, por los actos sucesivos, por las facultades que expresaron los acreedores, y aun por la parte de Michelena, segun se ha dicho antes, en cuyo caso ha incurrido su apoderado en contradiccion, desconociendo la jurisdiccion que confesó su poderdante.

Considerando: que en la presente instancia, aparece que los apoderados del concurso de Rios, de Camperos y Parres, aunque han objetado al crédito de la testamentaria de Michelena, no consta

hayan instaurado demanda ni accion; sino que solo se han aducido excepciones relativas al crédito antes referido, las que son de admitirse, conseqüente con lo mandado por la ley 7ª tít. 10 Lib. 11 Nov. Rec. que sirve de base á las doctrinas del conde de la Cañada, "Juicio Civil, tom. 1º part. 2ª cap. 2º párrafos 1, 2, 3, 4, cuya doctrina es observada por la práctica uniforme de los Tribunales, por la causa de que procede, en cuyo caso ha habido y existe obligacion de oír las excepciones que se aduzcan relativas al presente negocio.

Considerando: que si bien consta en autos que el Tribunal de la Inquisicion de México se constituyó acreedor el veinte de Abril de mil setecientos ochenta y cinco, de Doña Ana Josefa Estensoro, por la cantidad de cuarenta mil pesos, impuesta con hipoteca sobre la hacienda de los Laureles, con pension de réditos al cinco por ciento anual, cuyo gravámen pasó con la hacienda á los herederos de aquella, los que transfirieron su dominio á D. Juan Peña Madrazo, con anuencia del relacionado acreedor, en diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve; tambien aparece, que otra cantidad igual, se tomó del fondo del Concurso por el Juez de él, con cuyo carácter funcionaba la Inquisicion; sin contar al efecto con la anuencia de los acreedores, ni que fuese por su utilidad, puesto que no consta en autos, ingresasen al fondo de él los emolumentos ó réditos del capital enunciado que se impuso en el consulado del comercio de Veracruz, con la circunstancia de habérsele incluido con otra que completó la de setenta y cinco mil pesos en seis de Agosto de mil ochocientos diez; á lo que se agrega, que en tanto tuvo lugar la compensacion en cuanto que concurrieron las principales circunstancias al efecto, y entre ellas la reunion de acreedor y deudor, en cuya virtud tuvo *ipso jure* su verificativo lo depues-

to en la Ley 20, tít. 14 part. 5ª, mediante los cinco requisitos que profija.

Tiene que alegarse ademas en contra de los razonamientos del C. Lic. Jacobo Ramirez. 1º Lo expuesto ya someramente, pues si hubiera sido cierto que la cantidad de cuarenta mil pesos se hubiera tomado para imponerlos en el consulado referido en favor y utilidad del Concurso, se habia otorgado la escritura respectiva y por separado, haciendo constar el acreedor y deudor, detallando si fuere el Concurso el que ocupare el primer lugar enunciado, cuyas circunstancias omitió de un modo terminante; y en lugar de eso se otorgó escritura general por mayor cantidad, que produjo réditos que consta se entregaron al Tribunal de la Inquisicion, segun se demuestra por el recibo de ellos que otorgó su Tesorero, lo que aparece en autos; á lo que se agrega, que el mismo C. Cayetano Guerrero, apoderado general de D. José Mariano Michelena, presentó escrito al Juez del Concurso, pidiendo se liquidase el crédito de cuarenta mil pesos de la Inquisicion, y previo el reconocimiento que se mandó practicar en veinte y dos de Mayo de mil ochocientos treinta, se proveyó en veinticuatro del mismo mes se procediese á la liquidacion y se trajese á colacion de que debía hacerse cargo á la Hacienda Pública en el crédito que en él representa: todo lo cual aparece á fs. 27 vta. del cuaderno núm. 86.

2º No está aprobado asimismo que á la ex-Inquisicion se le debiesen los réditos vencidos que produjera el capital desde Agosto de mil ochocientos uno, á Agosto de mil ochocientos diez, á la vez que consta el entero que se le hiciera de créditos activos y réditos, importante todo de setenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos, de cuya cantidad no se ha rendido la cuenta comprobada que acredite la distribucion de esa suma, pues que el documento que presentó el

Lic. Ramirez cuando hizo la rectificacion de hechos de su informe á la vista sobre el particular, solo hace méritos de veintun mil y pico de pesos gastados por la Inquisicion en varias partidas, sin que en lo general estén legalmente comprobadas; y en lugar de eso aparecen algunos indebidamente pagados bajo la responsabilidad de ese Tribunal, y sin que del resto de los setenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos enunciados se haya dado la distribucion respectiva y sin que lo expuesto sobre el particular con respecto á la compensacion, tenga lugar con lo relativo á los réditos, en razon de estar de por medio la ley 20 enunciada que es de observarse con preferencia á la opinion de la Curia Filípica, como por no tener vigor la ley 24, tít. 15 Lib. 10 Nov. Rec., la que ademas no seria aplicable al caso que se cita.

3º Que el error de hecho relativo á la fecha en que tuviese lugar la compensacion, se halla exclarecido por lo que consta en autos, que expresan la fecha y el año, es decir, el seis de Agosto de 1810 en que tuvo lugar la compensacion con respecto á los cuarenta mil pesos enunciados; sobre cuyo particular tiene que considerarse, que ni el C. José Vallejo, ni su apoderado, han justificado la subrogacion que hiciera ante la Jefatura de Hacienda de Michoacan, con testimonio de la escritura relativa que se debió otorgar con sujecion al reglamento de 13 de Julio de 1859, referente á la ley de 12 del mismo mes y año, en cuyo caso no la podido ni puede considerarse el contrato de subrogacion, por falta de prueba legal; quedando por consecuencia con aplicacion el art. 5º del Decreto de 29 de Marzo de 1862, sin necesidad de que sobre el particular se hubiera seguido juicio por separado en razon á que la excepcion está resuelta sin causar instancia, por el decreto enunciado.

Considerando: que si no se estima ve-

Tomo III—Parte II.

rificada la compensacion el 6 de Agosto de 1810 en cuya fecha tomó el Tribunal de la Inquisicion la cantidad de que se ha hecho mérito, se puede permitir que el hecho tuviese lugar el 22 de Febrero de 1813, en cuya fecha se expidió la Ley de las Cortes Españolas que nacionalizó los bienes de aquel Tribunal, en cuyo caso resulta la responsabilidad del Gobierno consecuente con el art. 3º de la ley citada, á pagar los créditos y obligaciones de la Inquisicion aun cuando no alcanzasen á cubrirles el valor de los bienes nacionalizados, en cuya fecha el nuevo deudor de los cuarenta mil pesos impuestos en el consulado de Veracruz, se constituyó en acreedor de igual cantidad que á la Inquisicion se le debia por el Concurso de Peña Madrazo; con lo que se verificó la compensacion por ser iguales las cantidades que se tomaron el seis de Agosto enunciado.

Considerando: que el documento presentado por el C. Lic. Ramirez, al tiempo de la vista sin citacion de las partes, y sin las demas formalidades legales, no puede estimarse como documento ó título demostrativo del contrato sobre los cuarenta mil pesos, y de los réditos que se causaron desde el año de mil ochocientos uno hasta la fecha, por no aparecer las condiciones recíprocas entre el vendedor y comprador: ó mejor dicho, entre el Jefe de Hacienda y el Sr. Vallejo al verificarse el contrato, cuya constancia se estima indispensable, puesto que en la escritura es en donde se fijan aquellas, y es la base para su cumplimiento absoluto.

Atendiendo: á que la condonacion de réditos concedida al C. Vallejo, segun expresa el documento que presentó, relativo al entero del acto y en numerario de siete vijésimos, consecuente con el art. 22 del reglamento de 13 de Julio de 1859 citado, de esa gracia no se puede disfrutar, porque aun cuando en ese artículo de la ley, se condonan los réditos

á los censatarios dueños de las fincas que reportan los capitales que fueron nacionalizados, que hicieron la redencion consiguiente con el art. 12 de la misma ley; esa gracia, en el caso que no la hicieron las personas á quienes se concedió, la obtenian las que se subrogaron en lugar de aquellas, resulta que el convenio debió celebrarse con el Gobierno Nacional y no con las Jefaturas de Hacienda de los Estados, y aparece ademas la existencia de la circular de 27 de Julio del mismo año de 1859, que explicó y modificó varios artículos del reglamento fecha 13 citado, previniéndose expresamente en la aclaracion tercera, que la condonacion de que habla el art. 22 del reglamento, solo debería entenderse hecha á los censatarios que cumplieren con la ley, con cuya modificacion se restringió la disposicion del art. 22 citado, quedando los subrogados privados de la gracia de condonacion. De todo lo cual se viene en conocimiento, que se descubre la falta de derecho en la parte del Sr. Vallejo, quien no siendo dueño de las haciendas de Laureles y sus anexas, aun en el supuesto de que en la fecha de la expresada liquidacion aquellas reportaran el capital que fué de la Inquisicion, no pudo adquirirse con arreglo á las leyes mencionadas derecho alguno á los réditos de aquel capital, razon porque los que se debieron al Tribunal de la Inquisicion hasta el seis de Agosto de 1810 como mediante la liquidacion respectiva á la administracion de los fondos del Concurso por quien representa la Inquisicion, pertenece á la Hacienda Pública Federal, y no á la masa comun del Concurso, en razon de que segregado de él el capital que los produjera, tenían que seguir como accesorio á lo principal, mediante la compensacion de que se ha hecho mérito, que tuvo lugar segun las leyes 20, 21, tit. 14 part. 5^a, razon porque no debe figurar en el activo ni en el pasivo del Concurso de Peña Madrazo, sin

que por eso pierda el Sr. Vallejo sus derechos para que se le devuelva el numerario en el modo y términos con que hubiese hecho el pago del capital á que quiso subrogarse, suponiéndole existente y en estado de nacionalizarse con arreglo á las leyes de la materia.

Considerando: que aunque por la sentencia de graduacion pronunciada por el Juez de Distrito de Michoacan, fué colocado en primer lugar, y se mandó pagar de preferencia el crédito de la Testamentaria del general D. José Mariano Michelena, que segun dicha sentencia y el proyecto de graduacion formado por el síndico C. Bruno Patiño, importa ochenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos, segun la liquidacion practicada por el C. Lic. Antonio Moran, en la que el representante de la testamentaria ha fundado su accion, vale aquel capital noventa y siete mil doscientos diez y seis pesos; ese crédito no es legal ni por la causa de que procede ni por sus efectos,

1^o Porque tomando procedencia el crédito enunciado en el contrato de compañía que se celebrara el 17 de Julio de 1830, entre el Concurso y el Sr. Michelena, no aparece en autos que este hubiere dado cumplimiento á las obligaciones que contrajo y que se detallaron en la citada escritura, 1^o, porque en los cuadernos 88, 89 y 173, llamado libro de actas extrajudiciales, por el contenido de la escritura enunciada, y segun lo alegado por las partes que contradicen ese crédito, aparece no haberse practicado los inventarios del capital, con inclusion de terrenos, fábricas de las haciendas de Laureles cuando comenzó la compañía, segun se obligó el socio en el art. 2^o de la escritura enunciada, otorgada ante el escribano Miguel Cabrera, tanto mas necesario, cuanto que servia para que por ellos se conocieran los nuevos capitales que formaron las utilidades partibles entre los socios, pues no pueden reputarse suficientes al efecto los que se practica-

ron con arreglo á las existencias de muebles y efectos.

2º Por no haber asimismo constancia en autos sobre que el Sr. Michelena introdujese la cantidad de veinte mil pesos, muebles ó efectos equivalentes que sirvieran al jiro de la compañía á pesar de las reclamaciones que se le hicieron sobre el particular en mil ochocientos treinta y siete, y consta á fs. 20 y 21 vuelta del cuaderno 180, sobre lo que además aparece, que el síndico D. Florentino Mercado, expuso no haberse recibido la cantidad enunciada, extipulada en la compañía, la que subsistió hasta el año de 1847, contándose dos épocas distintas en que tuviese injerencia el socio en los bienes del Concurso.

3º No aparece á la vez, que el socio enunciado dió cumplimiento en lo relativo á la administracion personal mediante su industria aplicable al jiro de las haciendas, las que en lugar de eso fueron encomendadas á D. Primitivo Vaca, sin que llevase libros y cuentas necesarias á una negociacion sobre la cual se hará mérito despues, sin que en autos conste la cuenta general de cargo y data, de los siete primeros años que duró la compañía, pues que no puede estimarse legalmente como cuenta general con respecto á las dos épocas de la compañía los citados semanarios y semestres pertenecientes á los últimos diez años de la segunda época de aquella, razon porque no puede producir efectos la gloza que sobre el particular formara el C. Lic. Moran, quien fué nombrado contador y formó solo extracto de sus documentos, sobre cuya falta de cuentas hay que notar, que su cumplimiento ha sido reclamado por D. Genaro Cabañas, síndico del Concurso de los Rios, por D. Miguel Avila, yerno de Peña Madrazo, por D. Mariano Anzorena y por los demas acreedores que formaron las juntas visibles en el libro de actas extrajudiciales.

2ª El crédito enunciado tampoco tiene procedencia legal por la falta respectiva de liquidacion en forma que produjera el finiquito necesario que fuere firme y valedero; pues de autos consta no haber abonado el contador Moran al Concurso el valor de los terrenos de las haciendas importante de ciento dos mil trescientos treinta y un pesos tres reales, segun el inventario practicado en mil ochocientos treinta y ocho, en cuya fecha comenzó la segunda época de la compañía, y en esa operacion solo se tomó en consideracion setenta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos dos reales, valor dado á los terrenos por el inventario practicado en mil ochocientos cuarenta y siete al disolverse la compañía: no haberse abonado el valor de las fábricas antiguas de las haciendas que en mil ochocientos treinta y ocho se estimó en veinte mil setecientos diez pesos, sin que conste se hubiera abonado al haber del Concurso la cantidad de catorce mil pesos que Michelena cobró del Concurso de la Hacienda de Apeo, en uso de las atribuciones del socio, sin que se hiciese abono al haber del Concurso de la cantidad que resultó á su favor por las bajas que se hicieron en el inventario de mil ochocientos treinta, cuando se recibieron las haciendas de los fiadores del arrendatario D. Ignacio del Valle, por las cantidades que éste mal gastó, omitiéndose á la vez otros abonos á la cuenta liquidataria que se presentó entre los que hay que notar la falta de documentos ó recibos justificados con respecto á los veinte mil pesos que debió introducir el socio á la compañía, segun se ha dicho antes, así como la falta de abonos al Concurso de la cantidad de doce mil pesos que importó el descubierto del administrador Vaca; de todo lo cual resulta, y consecuente con lo dispuesto por la ley 81, tit. 18 part. 3ª 30. tit. 11 part. 5ª y doctrina de la Curia Filípica lib. 2º Comer. Ter

res. cap. 9º que la liquidacion practicada por Moran de que se ha hecho mérito, no produjo finiquitos en favor de Michelena.

3º Tiene ademas que atenderse á que, si bien aparecen en autos las juntas que tuvieron los acreedores con respecto á la aprobacion de cuentas, se viene en conocimiento por lo alegado y probado por las partes, que el finiquito á que alude el socio no ha sido aprobado por aquellos por haberse alegado los vicios intrínsecos de la junta extrajudicial de treinta de Abril de mil ochocientos cincuenta y uno á la que se presentaron las operaciones relativas á las cuentas; pues aunque en autos consta que esas actas adujeron al Juez de Distrito de Michoacan, C. Lic. José María Méndez, para su ratificacion, ese funcionario proveyó su auto condicional, fecha doce de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno, aprobando lo resuelto en la junta 'siempre que hubiere mayoría de créditos y de acreedores, sobre cuyo particular aparece el cómputo hecho en el informe á la vista por el C. Lic. Velasco que se estima legal por aparecer demostrado con las constancias de autos y las escrituras relativas á la falta de crédito que formaron mayoría del Concurso y de las personas acreedoras; á lo que tiene que agregarse, que aún suponiendo se hubiera cumplido con los requisitos enunciados, habria claudicado por lo resuelto en la acta de primero de Junio de mil ochocientos cincuenta y dos fojas 66 frente, cuaderno 23, sobre que lo resuelto por el graduador de los créditos no podría tomarse como resolutivo arbitral, ya por falta de los acreedores ausentes y ya por tratarse de un Concurso necesario en el que habia derechos fiscales, por lo que no le podia eliminar al juez ordinario nato de los autos, y á pesar que en esa junta se comprometieron los acreedores á pasar por la graduacion que hiciera el síndico,

aparece la protesta del C. Promotor Fiscal, sobre que para pasar por ese acuerdo le era necesario recabar la autorizacion del Supremo Gobierno y de la junta de Crédito público, fs. 72 vuelta cuaderno citado, y sin que en autos conste haberse emitido esa autorizacion que diera validez á lo acordado en la Junta expresada, cuya condicion que se impusieron, relativa á la mayoría de créditos y acreedores, tambien se remarcó en la acta de veinticinco de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos, en la de ocho de Junio del mismo año, y en la de ocho de Abril de mil ochocientos cincuenta y seis.

Considerando: que si bien en las mismas actas de que se ha hecho mérito, consta se ocuparon los acreedores de los puntos que acordaron, no aparece en ellas se hubiera hecho mencion en lo relativo á las cuentas y liquidacion de la compañía cuyo punto se excluyó, con lo que resulta, que aun suponiendo que el socio las hubiera presentado, no aparece mencion en las actas, y no consta la aprobacion de aquellos: así es que, como consecuencia de lo expuesto, se viene en conocimiento que, nula la acta de treinta de Abril de mil ochocientos cincuenta y uno por lo ya referido y que aparece en las actuaciones, no pueden tener efecto los actos que de ella procedan, consecuente con la regla legal de que "*quod ab initio vitiosum est tractu temporis non potest convalescere*" y he aquí por que no tiene lugar la accion adueida por el C. Lic. Alvirez para conseguir el pago de la autoridad que reclama, existiendo en su contra haber presentado las cuentas á la autoridad en papel simple, sobre cuyo particular hace mérito el C. Promotor Fiscal de no estar aquellas en el papel sellado respectivo, segun lo previenen los artículos 51 y 55 de la ley de catorce de Febrero de mil ochocientos cincuenta y seis, cuyo requisito es indispensable pa-

ra que hicieran fé en juicio, cuya falta de papel hizo que la parte incurriera en la pena del cinco por ciento sobre la cantidad de doscientos setenta y dos mil trescientos quince pesos tres reales, tres cuartillas, que es el mayor que se versó en la repetida liquidación; así es que, mediante lo expuesto, y consecuente con las leyes, resulta que la testamentaria del General D. José María Michelena, no probó su acción para que el Concurso de Peña Madrazo le pague la cantidad que ha reclamado, é incurrió en la pena de ley por la falta de papel sellado respectivo.

Considerando: por último, en lo que respecta á las actas: que si bien aparece que el seis de Noviembre de 1869 promovió el C. Lic. Jacobo Ramirez, en representación del de su clase José Vallejo, por sí y como albacea de la testamentaria del General Michelena, la continuación y terminación del Concurso que se hallaba paralizado hacía mas de once años, pidiendo se llamara una junta general de acreedores, y que la citación se hiciese en términos legales y acostumbrados en la práctica, consta en el cuaderno núm. 181, que el Juez de Distrito de Michoacán no atendió á todo lo que se le pidiera, contrariando en tal virtud lo dispuesto por las leyes 1.^a tít. 7.^o Part. 3.^a y 3.^a tít. 4.^o lib. 11. Nov. Rec., con cuyo motivo no concurrieron á la junta de 13 de Febrero de 1868 sino solo tres acreedores, por cuya junta se han quejado las partes García y Velasco en esta instancia, y sin que la no citación de las personas por quienes representan se hubiera subsanado ni con la presunción de existencia del Concurso de Rios ni de su síndico y de los herederos de Campero, en razón de que, en derecho, el ausente se representa vivo mientras no se pruebe lo contrario; sin que obste el nombramiento de defensor de ausentes que solo produce efecto legal cuando se ha hecho la citación en for-

ma y cuando las personas citadas no comparecieron en el término señalado. Mas atendiendo á que la falta enunciada se subsanó en el juicio oyendo á las partes que fueron representadas y contando con las protestas que han hecho de no alegar nulidad, se está en el caso de sentenciar sobre sus créditos, sentándose como constancia lo espuesto para la continuación de la actuación.

Considerando: que en igual caso que el crédito de la testamentaria del finado Michelena, se encuentra el de cuatro mil pesos que se reclaman de D. Juan Madrazo Corral, en razón que ese crédito, de cuyos recibos aparece á fs. 109 del cuaderno núm. 74 haberse expresado por el Tesorero de la Inquisición que Corral era fiador de su tío D. Juan Peña Madrazo, sin que sobre tal cantidad aparezca escritura de fianza á la que se refirieran aquellos conceptos, ni que á Corral se le expidiera la carta de lasto correspondiente para que con ella hubiera subrogado en lugar de la Inquisición; sino que por el contrario, aparece en el cuaderno citado desde la foja 104 á la 109 que el citado Corral cuando hizo el entero en el año de 1801 de los cuatro mil pesos, era solo encargado de su tío Peña Madrazo para hacer esa clase de pagos por cuenta de éste; á lo que se agrega, que por las constancias de fs. 140, 141 y 142 del cuaderno 78 aparece, que el deudor comun no llegó á dar fiador á la Inquisición para el pago de réditos, á la vez que ese Tribunal no accedió al pago de la cantidad enunciada que pretendia Madrazo Corral, cuyos antecedentes sirven para declarar la prelación en que se colocó el crédito enunciado en la sentencia de 1.^a instancia, máxime cuando que estando estendida en papel simple, debió ser reconocida en forma, consecuente con lo mandado por las leyes 118, 119, tít. 18 Part. 3.^a y sin que pueda producir fé en juicio, en vista de lo prevenido por las

leyes 1.^a 5.^a y 11 tít. 24 Lib. 10 Nov. Rec.

Atendiendo que el crédito de mil trescientos diez y siete pesos tres reales procedente de alcabalas que debia Peña Madrazo antes de ser concursado, que fueron liquidadas en Diciembre de 1803, y otro de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos tres reales, originados de unas responsivas de guías que otorgó el mismo, que tambien fueron liquidadas el año de 1804, cuyos créditos pertenecieron á la Inquisicion, por haberse obligado á pagarlo á la Real Hacienda cuando se resolvió la competencia suscitada al iniciarse el Concurso, los que fueron nacionalizados, pasando al dominio de la Hacienda Pública, en los que se subrogó el C. José Vallejo segun espuso, quien en su caso no pudo adquirir los privilegios del Fisco, segun lo previene la ley 27 tít. 34 Part. 7.^a, en cuyo caso al hacerse la graduacion de dichos créditos por el Juez de 1.^a instancia, fué contrariando lo dispuesto en la ley 33, tít. 14 Part. 5.^a en lo que respecto á que los créditos fiscales no tienen preferencia sobre los hipotecarios anteriores registrados; razon por que no deben ocupar los de guías y alcabalas, existiendo tambien sobre el particular la falta de testimonio de la escritura de cesion que se otorgó por la Gefatura de Hacienda del Estado de Michoacan.

Considerando: que si bien las Sras. Doña Ana Félix, Doña María Antonia y Doña María Gertrudis Gonzalez de la Guerra, fueron dueñas de las haciendas de Laureles y sus anexas, consta que las vendieron á D. Juan de la Peña Madrazo en el precio y con los gravámenes de que se ha hecho mérito en el párrafo quinto de esta sentencia, cuyo contrato se halla demostrado por la escritura de venta, fecha diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve, en cuya escritura aparece, en la cláusula cuarta, se dieron por recibidas

de la cantidad de setenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos seis reales cuatro y medio centavos á su satisfaccion; sin que de esa cantidad hicieran reserva alguna á su favor ó de otra persona: en cuya virtud el contrato de reconocimiento del capital de las Sras. Guerras, por dos años con réditos de que ántes se ha hecho mérito, fué secundario y sin la prelacion que se reclama; todo lo cual consta en la escritura mencionada que se registró en Zitácuaro el diez y ocho de Octubre del año citado; en la cual tambien aparece y corrobora el segundo contrato posterior al de la venta en que Doña Micaela Gonzalez de la Guerra, que no fué de las vendedoras y que no era dueña de las haciendas, intervino en el otorgamiento de la escritura de préstamo á censo redimible de que se ha hecho mencion; resultando de todo lo expuesto que el crédito de esas señoras no puede reputarse de dominio; mas sin que por ésto hayan dejado de ser dueñas de la cantidad de veinte mil ochocientos siete pesos, puesto que ni el General Michelena, que se llamó accionario, ni el albacea de su testamento, han aducido la escritura de cesion de acciones que se debió otorgar por dichas señoras, en cuyo caso se intiere, que no habiéndose demostrado la cesion, no se ha podido percibir legalmente los réditos correspondientes hasta Octubre de mil ochocientos setenta y nueve por el capital de veinte mil ochocientos siete pesos á que quedó reducido el crédito, mediante el abono que se hizo á D. José María Guerra, apoderado de los citados, cuyos réditos pertenecen al concurso, en razon de que, quitada la causa que tuviera Michelena para percibirlos, se quita el efecto.

Atendiendo: que la parte del Concurso de D. Joaquin Gutierrez de los Rios y la de D. Nicolás Campero, son dueños de la cantidad de cuarenta mil pesos, segun consta por la escritura de recono-

cimiento que se halla á fs. 44 frente, á la 54 id. del cuaderno núm. 68 de los autos, por la cesion visible en los cuadernos núms. 82 y 182 corriente que expresa la primera de aquellas escrituras y fué de los hijos del coronel D. Pedro Luciano Otero, y que desde 22 de Julio y 22 de Agosto del año de 1826 son dueños de los réditos á razon del cinco por ciento anual, vencidos desde aquella fecha y de los que se venzan hasta la terminacion del Concurso.

Que por las constancias del mismo cuaderno corriente aparece que la casa de Otero, de Guanajuato, de quien es cesionario el O. Pantaleon Parrez dueño de los réditos del capital enunciado de cuarenta mil pesos vencidos desde Agosto de mil ochocientos uno hasta Julio y Agosto de mil ochocientos veintiseis, y desde entónces hasta que el Concurso termine; de los correspondientes á los tres mil ochocientos noventa y cinco pesos cuatro reales, cuyo derecho á éstos réditos no fué cedido por la casa de Otero á la de Campero, debiéndose aclarar con respecto á que, la intervencion de esas partes en el presente Concurso no fué rechazada en 1ª instancia sino que fueron admitidas y presentadas por auto judicial introduciendo al efecto diligencias que se practicaron y sin que hasta la fecha se haya aducido excepcion sobre el particular, ni alegado paga de la cantidad que aquellos reclaman ni á la de los réditos, en cuyo caso tiene que estarse á lo alegado y probado en autos.

Considerando: que si bien Doña Ana Josefa Estensoro legó en su testamento la cantidad de dos mil cien pesos fundando las obras pías de misas, fincando al efecto de esa cantidad mil pesos para las relativas de la Virgen de Zapópan y la restante de aquella á favor del convento de S. Francisco de Zitácuaro, no consta en autos se determinase la fecha en que debía de imponerse ese capital,

sino que se dejó al arbitrio de los herederos el tiempo en que deban de cumplir y pagar el legado de cantidad, en cuyo caso no pudieron tener derecho las obras pías, sino hasta la fecha de imposicion en que se diese cumplimiento á la última voluntad de la testadora, desde cuya fecha comenzó la accion para percibir los réditos segun lo prevenido en la ley 23, tít. 9º Part. 7º; y como la imposicion enunciada tuvo lugar el 19 de Setiembre de 1799, por Peña Madrazo que la reconoció por siete años al cinco por ciento anual y con hipoteca de las haciendas Laureles y anexas, cuya escritura se registró en Zitácuaro el 18 de Octubre, y el capital lo adquirió el Gobierno por las leyes de nacionalizacion de los bienes del clero, resulta que la Hacienda Pública quien lo representa no tiene mas acreedores que los que tuvieran las obras pías, así respecto á la cantidad del legado como relativamente al tiempo de su imposicion, sin que antes de esa fecha pueda reputarse con privilegio que no tenian aquellos.

Considerando: con respecto al capital de cinco mil quinientos diez pesos, que perteneció al Juzgado de testamentos y capellanías del obispado de Michoacan, existen las razones antes sentadas sobre que los privilegios del Erario Federal no pueden ser otros sino los de la causa de que proceden, en cuya virtud y por cuanto no consta la fecha en que se registrara la escritura de 3 de Febrero de 1798, no puede estimarse legalmente la hipoteca especial, ni bastar al efecto la anotacion que en ese documento se puso en la escritura, por no ser los medios demostrativos al efecto y sin que obste el considerando 5º de la sentencia de 1ª instancia con respecto á los privilegios del Fisco que se estiman en los términos dichos en el presente párrafo.

Considerando: que el O. José Vallejo no ha presentado las escrituras de cesion de los créditos que á su favor otor-

gala la Gefatura de Hacienda de Michoacan, de los que se ha hecho ya mérito á pesar de lo cual se detallan aun para mas claridad y son: el capital de mil trescientos diez y siete pesos tres reales sin réditos procedente de alcabalas: el de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos tres reales sin réditos de unas responsivas de guías: el de dos mil trescientos pesos con réditos que fué del Hospital de locas de México: el de quinientos pesos con id. del Monasterio de Monserrate de la misma Ciudad: el de dos mil pesos con réditos de la capellanía de D. Vicente Rosas: el de mil quinientos con id. perteneciente al Juzgado de testamentos de México: el de mil quinientos pesos cuatro reales con id. del ex-convento de S. Juan de la Penitencia de la misma Ciudad: de dos mil pesos con réditos de D^a Juana Cuadra, y el de tres mil pesos con id. de la capellanía de D. Antonio Paniagua; sobre cuyos capitales tiene que advertirse que respecto á los dos primeros que se dicen cedidos sin réditos consta por certificado de liquidacion presentado por el C. Lic. Ramirez que la Gefatura de Michoacan, hizo la condonacion de réditos á favor del C. Vallejo de los capitales que lo produjeran, cuya operacion por no ser legal no produce efectos ni puede subsistir segun lo dispuesto en la prevencion 3^a de la circular de 27 de Julio de 1859; pero respecto de los otros cinco capitales que se dice fueron tambien cedidos con sus réditos vencidos, no consta eso en dicha liquidacion ni de alguna otra manera que se hiciera la condonacion de aquellos á favor del C. Vallejo, así es, que tanto por lo expuesto como por la prohibicion de la circular citada, no se ha podido tener derecho á los réditos correspondientes á los capitales enunciados y que se vendieron desde la cesion sobre lo que se hará mérito en la parte resolutive.

Considerando por último:} que en el

presente Concurso, fuera del crédito de los herederos de D. Ignacio Guerra Manzanares, procedente de honorarios que devengó como juez que conoció en el principio de este negocio y de las costas causadas desde el 6 de Noviembre de 1867 en que se promovió su continuacion y término no hay otros acreedores privilegiados anteriores á los créditos, censos ó hipotecas, de antigua imposicion; por todo lo expuesto y con fundamento de las leyes citadas en el cuerpo de esta sentencia, Ley 34 tít. 12 partida 5^a Curia Filíp. tomo 3^o cap. 3^o núm. 45 en lo relativo al cumplimiento de obligaciones de los sócios, leyes 26, 27 y 31 tít. 12 part. 5^a relativa á las cuentas del que administra bienes ajenos Ley 1^a tít. 1^o Lib. 10 Nov. Rec., Ley 1^a tít. 23 Part 3^a Ley 6^a tít. 5^o Part. 5^a Ley 30 tít. 11 Part. 5^a y Real Cédula de 25 de Enero de 1789 inserta en las Pandectas bajo los números 3251 y 3252 artículos 20 y 21 fallo:

1^a Se declara que este Tribunal es y ha sido competente para conocer en el presente negocio ó para revisar revocando ó confirmando la sentencia de graduacion de créditos pronunciada en 1^a instancia, incluido el que ha reclamado el representante de la testamentaria del general D. José Mariano Michelena, así como para oír las excepciones que se hayan aducido en esta instancia.

2^a Se confirma la citada sentencia de graduacion en sus considerandos sexto, sétimo y punto primero resolutive en la parte que declaró compensado el capital de cuarenta mil pesos que se debía al Tribunal de la extinguida Inquisicion de México, con el de igual valor que tomó de los fondos del Concurso de Peña Madrazo que impuso por su cuenta á censo redimible por cinco años en el abolido Consulado del Comercio de Veracruz, con cuyo hecho dejó de figurar en el activo y pasivo del Concurso, y se declara: que la compensacion enunciada

tuvo lugar el 6 de Agosto de 1810, fecha de la imposición en el Consulado, cuya compensación se entiende con respecto á los capitales líquidos de los cuarenta mil pesos que se debieron mutuamente la Inquisición y el Consulado: con respecto á los réditos vencidos por el primero de esos capitales, desde el 27 de Agosto de 1801 hasta el 10 de Agosto de 1810, pertenecen, no á la masa, comun del Concurso, sino á la Hacienda Pública Federal que se subrogó en los derechos de la Inquisición, cuyo cobro hará efectivo el representante del Erario previa la liquidación respectiva con la rendición de cuentas comprobada de los setenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos cinco reales, perteneciente al Concurso que administró la Inquisición, sin que el C. Vallejo tenga derecho alguno á la cantidad que resulte de la liquidación, quedando revocado respecto de éstos dos puntos aclaratorios el auto de 4 de Noviembre de 1869 dictado por el juez de 1ª instancia.

3ª Se revoca la relacionada sentencia de graduación del inferior en la parte 1ª del segundo punto, y por la que se mandó pagar en primer lugar y de preferencia el capital de noventa y siete mil doscientos diez y seis pesos que demandó la testamentaria del general D. Mariano Michelena, cuyo crédito no debe figurar en el presente Concurso.

4ª Se impone la obligación al albacea de la testamentaria del citado Michelena, de devolver al Concurso de Peña Madrazo la cantidad de cuarenta y siete mil doscientos pesos que tiene percibidos de réditos del capital que refiere la proposición precedente hasta el 11 de Octubre de 1869, devolviendo á la vez las demás sumas que desde entonces haya percibido, que engrosarán al activo del Concurso, y se condena al citado albacea á pagar la cantidad de trece mil quince pesos sesenta centavos á la oficina del papel sellado de Morelia como pena en que

Tomo III—Parte II.

incurrió por haber usado del papel común en las llamadas cuentas que adujo; cumplidas las obligaciones precedentes, y queda el derecho á salvo del referido albacea que crea tener contra el Concurso de Madrazo para que lo deduzca donde y cuando le convenga.

5ª Se revoca la referida sentencia de graduación en la parte que colocó el crédito de cuatro mil pesos sin réditos llamado de Madrazo Corral, y se declara, que ese capital no debe figurar en el pasivo del presente Concurso por no hallarse justificado en su legal procedencia.

6ª Se revoca asimismo la enunciada sentencia de graduación en la parte del punto segundo resolutivo que colocó en segundo lugar el capital de dos mil trescientos pesos y sus réditos que perteneció al Hospital de locas de México: el de quinientos pesos y sus réditos del Monasterio de Monserrate de la misma ciudad: el de mil trescientos diez y siete pesos tres reales sin réditos procedente de alcabalas, y de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos tres reales, también sin réditos, originados de las responsabilidades de guías, todos representados por el C. Vallejo en lo personal, y se revoca asimismo en todo el contenido del punto segundo de la parte resolutive que concedió derecho al referido Vallejo á cobrar los réditos vencidos por otros capitales en que se subrogó, porque sus réditos no pudo adquirirlos por los contratos que refiere celebrara con la gefatura de Hacienda de Michoacan, á cuyos réditos solo tiene derecho la Hacienda Pública Federal.

7ª Después de quedar fuera del activo y pasivo del Concurso de Peña Madrazo los tres capitales expresados en los artículos 2º 3º y 4º de esta sentencia la graduación de los acreedores y créditos por sus clases y orden de fechas para que sean pagados, es la siguiente:

En primer lugar el crédito de honora-

rios valioso de tres mil ochocientos setenta y siete pesos sin réditos perteneciente á los herederos de D. Ignacio Guerra Manzanáres, y las costas del Concurso desde el 6 de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete, previa la liquidacion que hará el Síndico, y que presentará para que sea aprobada por los herederos que han intervenido en esta segunda instancia y por el juez de distrito de Michoacan.

En segundo lugar deben ser pagados todos los créditos escriturarios con hipoteca especial registrada segun sus fechas, y son los siguientes:

Primero: el capital de dos mil pesos del censo de D. Alonso de Solórzano impuesto el 21 de Mayo de mil seiscientos quince.

Segundo: el de igual suma impuesto por el mismo Solórzano á favor de la capellanía de Jorge Baez Julian el doce de Noviembre de mil seiscientos veintidos que perteneció al ex-convento de S. Francisco de Morelia que lo representa el primero la Hacienda Pública Federal y el segundo el C. Vallejo en lo personal quien lo recibirá sin réditos pues los vencidos por estos capitales y en los términos que fueron liquidados por el Síndico del Concurso el once de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve hasta la fecha del contrato de subrogacion pertenecen á la Hacienda Pública Federal.

Tercero: el capital de cuatro mil pesos con sus réditos, segun la liquidacion del Síndico en la fecha citada, dote de la capellanía fundada por el Lic. D. Juan de Barrientos en mil seiscientos cuarenta que corresponde á la Hacienda Pública Federal.

Cuarto: el capital de dos mil pesos de la capellanía de Doña Juana Cuadra impuesto el veintidos de Mayo de mil seiscientos cuarenta.

Quinto: el de mil quinientos pesos de la mandada fundar por Blas Hernan-

dez de Vargas el diez y nueve de Noviembre de mil seiscientos noventa. El de igual suma del ex-convento de San Juan de la Penitencia de México, impuesto el veintitres de Diciembre de mil setecientos noventa y dos.

Sexto: el de tres mil pesos de la capellanía del Br. D. Antonio Paniagua reconocida por D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra en escritura de cinco de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho. Estos cuatro capitales del C. Vallejo sin los réditos vencidos hasta la fecha de la subrogacion esos pertenecen á la Hacienda Pública Federal segun la liquidacion practicada por el Síndico en la fecha referida.

Sétimo: el capital de cuatro mil pesos, dote de la capellanía de D. Juan José Chavez.

Octavo: el de setecientos cincuenta pesos de la del Br. D. Juan Antonio Cardoso.

Noveno: el de tres mil pesos de la cofradía del Santísimo de la Parroquia de Zitácuaro.

Décimo: el de cien pesos del aceite de la lámpara de la misma Parroquia, reconocidos por la citada escritura de seis de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho.

Undécimo: el de ocho mil pesos de los legados de cuatro mil pesos cada uno dejados por Doña Teresa Bernal de Aztefe fincados á favor del ex-convento de Carmelitas de México.

Duodécimo: el de mil cien pesos de otro legado dejado por la misma señora á favor del ex-convento de Santa Teresa la antigua de la misma ciudad, reconocidos estos legados por D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra en escritura de seis de Mayo del mismo año de mil setecientos cincuenta y ocho: esos seis capitales con sus réditos, segun fueron liquidados por el Síndico, pertenecen á la Hacienda Pública Federal.

Décimo tercero: el capital de dos mil

trescientos pesos que fué del Hospital de locas de México.

Décimo cuarto: el de quinientos pesos del monasterio de Monserrate reconocido por la mencionada escritura de seis de Mayo, pertenecen al C. Vallejo sin rédito vencido hasta la fecha de la subrogacion, conforme á la liquidacion del Síndico, y los anteriores pertenecen á la Hacienda Pública Federal.

Décimo quinto: el capital de cuarenta mil pesos impuesto por escritura de ocho de Agosto de mil setecientos noventa y nueve á favor de los hijos del coronel D. Pedro Luciano Otero, del que pertenecen veinticuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos, cincuenta centavos al Concurso de D. Joaquín Gutierrez de los Rios, y el resto de quince mil veinticinco pesos cincuenta centavos á los herederos de D. Nicolás Campero, debiéndose pagar tambien los réditos de ese capital á razon del cinco por ciento anual vencidos desde el ocho de Agosto de mil ochocientos uno hasta igual fecha del año próximo pasado, y los que se vencieren hasta la terminacion del Concurso, cuya liquidacion se hará por las partes en forma y con citacion del Promotor Fiscal, estimándose la que corresponda tanto al Concurso de Rios y herederos de Campero como á la de Parres, contándose para este desde mil ochocientos uno hasta mil ochocientos veintiseis.

Décimo sexto: el capital de dos mil ochocientos siete pesos impuesto por escritura de diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve perteneciente á las señoras Doña Ana Félix, Doña María Antonia y Doña María Gertrudis Gonzalez de la Guerra, á las que, ó á sus herederos se les citará en la forma legal por el Juzgado de Distrito de Michoacan, fijándose el plazo que estime conveniente al efecto, para la liquidacion de los réditos, desde los últimos que recibieron y que se han ven-

cido hasta Setiembre del año pasado; y si no comparecen, procederá el C. defensor de ausentes en union del Síndico á practicar la liquidacion enunciada.

Décimo sétimo: el capital de dos mil cien pesos de los legados dejados por Doña Ana Josefa Estensoro para la Virjen de Zapopan y el ex-convento de San Francisco de Zitácuaro, los que pertenecen á la Hacienda Pública Federal, de cuyos réditos no fueron liquidados, cuya operacion se practicará por el C. Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito de Michoacan y el Síndico del Concurso.

Décimo octavo: Y por último, el de tres mil y sus réditos á razon del cinco por ciento anual perteneciente á D. Vicente López Varela á quien se citará ó á sus herederos por el Juzgado de Distrito de Michoacan y se procederá en los mismos términos ante dichos con respecto á las señoras Gonzalez Guerra.

En tercer lugar, deben ser pagados hasta donde alcance el activo del Concurso, los créditos meramente escriturarios y sin hipoteca especial registrada cuyos títulos aparecen en los autos, no tomándose en consideracion los que carecen de comprobantes, y por lo mismo, solo deberán pagarse: 1º El capital de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos sin réditos que representa Doña Francisca Estrada, sucesora de Doña Josefa Peña Madrazo: 2º El de mil ciento cuarenta y seis pesos sin rédito perteneciente á los vecinos de Maravatío, que debió servir para la construccion de un puente: 3º El capital de cinco mil quinientos diez pesos que perteneció al Juzgado de testamentos de Morelia, revocándose respecto de este punto la segunda parte del punto primero resolutivo de la sentencia de graduacion, que mandó colocar ese crédito entre los censos de antigua imposicion, cuyo capital pertenece á la Hacienda Pública Federal y la liquidacion de sus réditos la

practicará el Promotor Fiscal del modo que se ha dicho antes: 4º El capital de mil trescientos diez y siete pesos tres reales procedente de alcabalas y el de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos tres reales de unas responsivas de guías sin réditos y que representa el C. José Vallejo.

En cuarto lugar serán pagados todos los acreedores quirografarios hasta donde alcance y según el orden que por sus fechas fijó el Síndico del Concurso en el proyecto de graduación en que se fundó la sentencia de veintiocho de Octubre de mil ochocientos setenta y nueve, la que queda subsistente en todo lo que no haya sido revocada ni modificada por ésta de vista.

8º El albacea de la testamentaria del General Michelena devolverá, para que ingrese al haber del Concurso, la cantidad de veintiun mil ochocientos cuarenta y seis pesos noventa y tres centavos que importa y que recibió por el capital de las señoras Gonzalez Guerra.

9º Se dejan á salvo los derechos del C. José Vallejo para que ocurra á la gefatura de Hacienda de Michoacan á efecto que se le devuelva en los mismos términos que hizo el entero de los siete vijésimos que pagó para gozar la gracia de condonación de réditos que aquella no le pudo otorgar.

10º Prévengase al C. Promotor Fiscal que, teniendo á la vista la comunicación del C. Ministro de Hacienda y crédito público visible á fs. 110 frente, del Toca, proceda á la liquidación respectiva á que se refiere, fijando su atención en la falta de producto á que alude, manifestándose por vía de aclaración, que esa liquidación no fué hecha en segunda instancia por no dilatar el resultado final como por estimarse suficiente al capital para el pago de los créditos de la Hacienda Pública.

11º Se declara que todos los pasos dados por algunos acreedores y resolucio-

nes tomadas por el Juzgado de Distrito de 1ª instancia desde el seis de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete hasta que pronunció la sentencia de graduación del Concurso, en nada perjudican los derechos de aquellos, ni á los de Rios, Campero y sucesores de Otero.

12º No se hace especial condonación en costas.

Notifíquese esta sentencia á las partes presentes y con exhorto á las ausentes, en caso de conformidad, compúlsese la correspondiente ejecutoria y remítase juntamente con los autos, con exclusión del Toca y cuaderno de informes á la vista al Juzgado del Distrito de Michoacan para su cumplimiento.

El C. Magistrado de Circuito lo decretó y firmó, doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal. —Ramon Reinoso.*

Concuerda con su original que obra en el Toca de los autos de Concurso á bienes de D. Juan de la Peña Madrazo; y se compulsa en virtud de lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querétaro, Marzo veinte de mil ochocientos setenta y uno. Damos fé.—*Aurelio Ramis Portugal.*

PEDIMENTO del C. Procurador general de la Nación.

El Procurador general de la Nación dice: que los autos del Concurso á bienes de D. Juan de la Peña y Madrazo, están formados por un número excesivo de cuadernos, que contienen muchos y muy variados incidentes. El juicio comenzó hace 70 años: entonces regia una legislación absolutamente distinta de la actual; en el trascurso de tanto tiempo, la conservación de los bienes, y los diversos intereses de los acreedores, han hecho necesaria la práctica de diversas diligencias; han motivado distintos acuerdos entre dichos acreedores; y el que suscribe, ha necesitado hacer un estudio

detenido de todas las constancias de autos, para formar un juicio concienzudo sobre las sentencias de graduacion de créditos que en 1ª y 2ª instancia han sido pronunciadas.

Creyó que para facilitar este trabajo, y para dar á los acreedores toda la libertad posible y todos los medios oportunos para fundar los derechos que respectivamente sostienen, era muy conveniente correrles traslado, á fin de que expresasen los agravios que creen haberles inferido la sentencia de 2ª instancia.

Esa respetable Sala, penetrada de la conveniencia de este pensamiento, se sirvió mandar correr, y de hecho se corrieron los traslados, concediendo á cada interesado el plazo de quince días para que expresase agravios; pero lo único que se ha conseguido, es que cada uno tuviese los autos en su poder por el expresado término, y los devolviese despues sin mas expresion que la de reservarse para alegar al tiempo de la vista.

El Procurador general comprende muy bien el motivo que puede haber decidido á los acreedores á guardar silencio por ahora; pero á causa de ese mismo silencio, el que suscribe ha tenido necesidad de examinar mas atenta y detenidamente todas y cada una de las constancias de autos, y estudiar tambien con detenimiento y meditacion las muchas y verdaderamente graves cuestiones legales, que con la sentencia de graduacion se relacionan.

Tal ha sido la razon porque, contra su costumbre, invariablemente seguida, el Procurador general se ha visto precisado á conservar en su poder los autos del Concurso, algunos dias mas de los que se le concedieron para extender su pedimento oficial, y todavia hoy lo extiende con el temor de no haber abarcado en su estudio, todos y cada uno de los incidentes del negocio.

Afortunadamente el laborioso memorial ajustado que formó el finado O. Lic.

Antonio Florentino Mercado; el proyecto de graduacion que, como Síndico del Concurso y por acuerdo de los acreedores, presentó el C. Lic. Bruno Patiño, la sentencia del Juez de Distrito, la muy laboriosa del Tribunal de Circuito, los informes á la vista de los patronos de los acreedores, y el pedimiento fiscal de 2ª instancia, son piezas jurídicas de bastante mérito, y que han servido en gran manera para facilitar al que suscribe el estudio de las diversas cuestiones que se debaten.

El proyecto de graduacion, y la sentencia de 1ª y 2ª instancia concuerdan en muchos puntos; y hay la circunstancia especial de que en varios de esos mismos puntos, están tambien de acuerdo los interesados. Por tal motivo, solo se ocupará el Procurador general de los puntos en que hay discordancia entre las sentencias de 1ª y de 2ª instancia, y de aquellos en que, aunque las sentencias están conformes, los interesados, por no estarlo, han interpuesto el recurso legal de súplica.

Tanto en el proyecto de graduacion, como en las sentencias, se ha reconocido la escala legal en que los diversos créditos deben ser colocados; y de las seis clases en que la ley distribuye á los acreedores, el proyecto y las sentencias han dado el primer lugar á los acreedores singularmente privilegiados, el segundo á los de hipoteca especial, y tercero á los de hipoteca general. Entre los de estas dos últimas clases han establecido el orden de antigüedad, y así es como, en opinion del que suscribe, por punto general ambas sentencias descansan en un principio indisputable de justicia y legalidad.

Pero en la colocacion de los diversos créditos, en la calificacion de su legalidad y de su buen origen, hay diferencia entre ambas sentencias; y estas son las que el infrascrito pasa á marcar, y sobre las cuales expresará despues su pro-

pia opinion, y pedirá lo que estime arreglado á derecho.

El proyecto de graduacion reconoce como singularmente privilegiados dos créditos, que son primero, el de 97,216 pesos, noventa y siete mil doscientos diez y seis pesos, que en el mismo proyecto se califica de refaccionario, y que correspondiendo á la testamentaria del Sr. Michelena ha sido representado por el Sr. Vallejo; y segundo, el de 3,877 pesos, perteneciente á la testamentaria del Sr. Guerra Manzanares, y procedente de honorarios devengados por este.

La sentencia de primera instancia está absolutamente conforme, respecto de estos dos créditos, con el proyecto de graduacion; pero la de segunda, solo dá colocacion de singularmente privilegiado al crédito del Sr. Guerra Manzanares, y en cuanto al llamado refaccionario del Sr. Michelena, únicamente le deja sus derecho, á salvo, para que previa liquidacion pueda reclamar del Concurso la cantidad que resultare deberle, en virtud de los contratos de sociedad y arrendamiento que celebró con dicho Concurso.

Entre los créditos garantizados con hipoteca especial, el proyecto de graduacion y ambas sentencias están de acuerdo en que debe dárseles el primer lugar á los créditos hipotecarios á la compra que D. Juan Peña Madrazo hizo de la hacienda de Laureles, y el segundo á las hipotecas que el mismo Madrazo constituyó con posterioridad. Pero respecto de las hipotecas constituidas antes de dicha compra, han surgido varias cuestiones que no carecen de interes y de gravedad.

La primera se refiere á los cuarenta mil pesos que el extinguido Tribunal de la Inquisicion impuso sobre "Laureles" con un rédito de cinco por ciento anual. Hay la coincidencia de que la Inquisicion, como Juez de los autos, tomó de los fondos del Concurso \$ 40,000, y los dió en depósito irregular con un cinco

por ciento de réditos al consulado de Veracruz; esta circunstancia y la de que en virtud de la ley que suprimió la Inquisicion, el Erario Público asumió los derechos de dicha Inquisicion, y en virtud de la que suprimió los consulados se ha subrogado en los derechos y obligaciones de estos, han servido de razon para declarar que el crédito activo de la Inquisicion contra la Hacienda de Laureles, está compensado con el crédito activo del Concurso, contra el consulado de Veracruz. Tanto la sentencia de 1ª como la de 2ª instancia, están conformes en que la compensacion debe entenderse hecha por ministerio de la ley, y solo se diferencian en cuanto á los réditos vencidos con anterioridad á esa compensacion.

La segunda cuestion se refiere al capital de \$ 5,510, pertenecientes al juzgado de testamentos del obispado de Michoacan. Este crédito fué contraído por Peña Madrazo, antes de que comprara la Hacienda de "Laureles," y cuando la explotaba en calidad de arrendatario. Otorgó escritura de reconocimiento, hipotecando los llenos de la finca que ya no existen, y por ese motivo, el Tribunal de Circuito hace figurar este crédito entre los simplemente escriturarios. El Juzgado de Distrito, sin desconocer esta circunstancia, fijó la atencion en que, si bien Peña Madrazo hizo hipoteca especial de los llenos, tambien agregó la general de todos sus bienes, y en esto se fundó para resolver que, una vez adquirida la finca por Peña Madrazo, el crédito debe figurar entre los de hipoteca general.

La tercera cuestion se refiere al crédito de \$ 4,000 reclamado por Madrazo Corral. La sentencia de 1ª instancia lo ha considerado como acreedor lejítimo, y lo colocó en el lugar correspondiente.

La de segunda por el contrario, ni lo considera como acreedor, ni le dá colocacion.

Entre los créditos hipotecarios, así de hipoteca especial como de general, hay varias diferencias en cuanto á su colocación, entre los fallos de 1ª y de 2ª instancia. El que suscribe no cree necesario examinarlas detalladamente, porque sentado el principio de que en cada categoría la colocación debe hacerse por el orden de antigüedad, esta es una clave segurísima para designar á cada uno el lugar que le corresponde.

Pasa, pues, á ocuparse de los puntos de diferencia marcados arriba, comenzando por el exámen y calificación del crédito presentado como refaccionario por la testamentaria del Sr. general Michelena. Al efecto, y para dar mas claridad á los razonamientos, conviene estampar antes algunas consideraciones generales.

Al hacerse en un Concurso la graduación de créditos, es preciso ante todas cosas; reconocer dos clases de acreedores: los que lo son del deudor comun, y los que despues han venido á serlo del Concurso, los que han devengado honorarios durante la sustanciación del juicio, como son, por ejemplo, los administradores, los avaluadores, los abogados y los que han celebrado contratos con el Concurso ó su legítimo representante, pertenecen á la segunda categoría, y sus créditos, como cargos comunes del Concurso, deben ser satisfechos antes que los de los acreedores del deudor comun. Las deudas comunes del Concurso, importan una reducción del capital divisible entre los acreedores; y por eso las leyes han dado á esa clase de créditos el carácter de singularmente privilegiados.

Por estas consideraciones, el crédito de la testamentaria del Sr. Guerra Manzanares, como de hecho ha figurado en primer lugar.

La misma colocación correspondería al crédito refaccionario del Sr. Michelena, si solo debiera atenderse á su origen, porque en efecto, la procedencia que se

le designa, es de ministraciones hechas en dinero y efectos, para la explotación de la finca concursada, y el de utilidades que en virtud de un contrato de sociedad han debido repartirse entre el Concurso y el socio Michelena. Pero para el reconocimiento de un crédito, no basta considerar su procedencia legítima; es necesario que el crédito sea cierto, justificado y líquido. Y los autos suministran pruebas bastantes para sostener que todas esas cualidades faltan al del Sr. Michelena.

Conforme al contrato de sociedad, el Sr. Michelena debió introducir para la explotación de la finca 20,000 pesos en dinero ó bien en efectos propios para el fomento de la misma finca. Conforme á dicho contrato, debió justificarse esa entrega de una manera especial y detallada ante el Juzgado de letras de Zitácuaro. Tal justificación no aparece, y todo induce á creer que no se hizo, por que las constancias debían aparecer en el Juzgado de Zitácuaro, y el Sr. Michelena habría cuidado, como era su deber, de recoger un testimonio de las constancias de esa entrega, verificada en los términos prescritos por el contrato de sociedad.

Los representantes del Sr. Michelena han pretendido subsanar este defecto capital alegando que el Sr. Lic. Moran, liquidó y reconoció este crédito y lo han reconocido tambien los acreedores en diversas juntas celebradas ante el Juzgado de Distrito de Michoacan; pero para palpar la debilidad de esta prueba, basta tener en consideración: primero, que el Sr. Lic. Moran, fuera cual fuese su representación, no tenía misión legal, para reconocer créditos: segundo, que solo por inducción se viene sosteniendo que hiciera tal reconocimiento; y tercero, que aún suponiendo que lo hubiese hecho, sería ilegal ó insostenible, porque pugnaría abiertamente con la cláusula expresa del contrato de sociedad segun la cual,

la introduccion de los 20,000 pesos debia justificarse de una manera especial y determinada ante el Juez de letras de Zitácuaro.

Respecto de la parte de utilidades que los representantes del Sr. Michelena aseguran pertenecerle, es incuestionable que la existencia de esas utilidades y su monto real, solo podian ser el resultado del exámen y glosa de sus cuentas de administracion y de la liquidacion consiguiente; pero la verdad constante en autos es, que el Sr. Michelena no presentó esas cuentas en la forma debida y que los apuntes por él exhibidos no bastan ni con mucho á llenar el deber que sobre este punto se le impuso en el contrato de sociedad.

Lo dicho basta para poner en claro, que si bien el Sr. Michelena á título de refaccionario y socio del Concurso puede tener derecho contra este, tales derechos no están justificados; porque no se conoce su monto líquido, ni puede lograrse esa justificacion y esa liquidacion sin que por una parte pruebe previamente que introdujo los 20,000 pesos de refaccion, y por otra rinda la cuenta legal de su administracion cuyo exámen y glosa vengan á fijar que le corresponden utilidades y cuál sea su monto. Pero es fuera de duda que en el estado incierto é ilíquido que guarda su crédito, no puede figurar en la sentencia de graduacion.

Por estas consideraciones, creo que en rigor de justicia, debe confirmarse la parte relativa al fallo de segunda instancia.

Respecto de los cuarenta mil pesos del crédito de la extinguida Inquisicion, creo, como la sentencia de 1ª y 2ª instancia que deben declararse compensados con los 40,000 pesos que por disposicion de la misma Inquisicion se colocaron en el consulado de Veracruz, y las razones que para ello me sirven de fundamento, son mas amplias que las

consignadas en dichos fallos. El fundamento principal de esto es, que la Inquisicion renunció los caracteres de deudor y acreedor por una misma cantidad. Yo voy á considerar la cuestion en los dos casos posibles. O la Inquisicion colocó en el consulado los 40,000 pesos por su propia cuenta y como capital suyo, ó como fondo del Concurso que debia quedar á disposicion de éste. En el primer caso se ha hecho un pago real y efectivo, y por consiguiente quedó extinguida su accion: En el segundo la cuestion demanda un exámen mas detenido, de que paso á ocuparme.

Indudablemente la Inquisicion era acreedor por los 40,000 pesos que de sus propios fondos impuso sobre la Hacienda de Laureles; pero en la hipótesis que nos ocupa, no puede llamárseles deudor de los 40,000 pesos que colocó en el consulado de Veracruz. Para esto último suponemos que solo procedió como juez de los autos y que la colocacion de los 40,000 pesos no fué como de un capital suyo, sino como fondo del Concurso; que por lo mismo debian quedar por cuenta de éste y á su disposicion. Es de derecho cierto, que cuando el juez de los autos deposita alguna cantidad, no toma el carácter de deudor ni de acreedor, sino simplemente asegura esa cantidad á disposicion del que deba percibirla.

Pero la compensacion de los 40,000 pesos ha sido hecha por otros motivos y circunstancias, que es muy fácil determinar.

El decreto de las Cortes españolas de 22 de febrero de 1813 dispuso, que los fondos, derechos y acciones de la extinguida Inquisicion, ingresaran al Erario Nacional. De esta manera fué como la Hacienda Pública se subrogó, en lugar de la Inquisicion, en el crédito de 40,000 pesos que tenia, contra la Hacienda de Laureles y representaba en el Concurso de D. Juan Peña y Madrazo.

La ley que suprimió los antiguos consulados dispuso que la Nacion asumiese sus derechos y obligaciones. Y como el consulado de Veracruzera deudor al Concurso de los 40,000 pesos que el Tribunal de la Inquisicion le habia dado en depósito, de esta manera resultó que la Nacion era deudora al Concurso de dichos 40,000 pesos.

Así es como la Hacienda Pública reunió los caracteres de deudor y acreedor. Entonces fué cuando se verificaron las condiciones que la ley exige para la compensacion de créditos, y esta debe entenderse hecha por ministerio de la misma ley.

Hé considerado, como indiqué, los dos casos posibles; pero creo como la sentencia de 1ª y 2ª instancia que la Inquisicion impuso por su propia cuenta los \$40,000 del Consulado. Para á fundar este concepto con razones decisivas; primera que la escritura de imposicion se extendió á favor de la Tesorería de la Inquisicion y no á favor del Concurso; y segunda, que la imposicion no fué solo por los \$40,000 sino por mayor cantidad, siendo el resto perteneciente á los fondos de la Inquisicion. Esa confusion de fondos prueba con evidencia que la Inquisicion impuso los \$40,000 por su propia cuenta.

Podrá suscitarse la cuestion sobre si la Inquisicion tuvo facultades para hacerse ese pago; pero esto solo determinaría una responsabilidad suya; como juez de los autos, sin destruir el hecho real y positivo de que se hizo el repetido pago.

Las anteriores explicaciones resuelven en mi concepto, no solo la cuestion principal sino tambien otras incidentales que no han dejado de introducir equívocos y complicaciones en este embrollado Concurso; creo útil ocuparme de esos incidentes, porque su exámen contribuirá en mucho para esclarecer los

Tomo III—Parte II.

derechos legítimos y desechar las pretensiones injustas.

En 9 de Setiembre de 1853, un decreto del Gobierno general hizo cesion á la mitra de Michoacan de los derechos que el Erario público representaba en el Concurso de Laureles. Se ha sostenido que en virtud de esta cesion, la mitra de Michoacan se hizo dueña del crédito de \$40,000 que pertenecía á la extinguida Inquisicion.

Dadas las leyes de desamortizacion y redencion de los bienes que administraba el clero, se creyó que debía entrar en ellas el mencionado crédito de \$40,000, y bajo tal supuesto, el Sr. D. José Vallejo asegura haberlo redimido. Pero tanto la cesion de ese crédito á la mitra de Michoacan, como la pretendida redencion del Sr. Vallejo, son nulas é insubsistentes. Si la colocacion de 40,000 pesos que hizo la Inquisicion en el consulado de Veracruz, fué por su propia cuenta, ya hemos visto que debe surtir los efectos de pago de su respectivo crédito, y este por lo mismo quedó extinguido. Si la colocacion fué por cuenta del Concurso, ya hemos visto tambien que el Erario público adquirió los derechos de la Inquisicion, y muy poco despues asumió las obligaciones del consulado de Veracruz, reuniendo así las calidades de acreedor y deudor por una misma cantidad. En uno y en otro caso, el crédito activo de la Inquisicion quedó extinguido bien por pago real, bien por compensacion.

En consecuencia, ni los \$40,000, del crédito activo de la Inquisicion han podido formar parte de la cesion hecha por el gobierno á la mitra de Michoacan, ni dicho crédito ha podido ser redimido por el Sr. Vallejo; porque realmente ya no existia al hacerse la cesion y la pretendida redencion.

La cuestion sobre créditos pendientes al tiempo de hacerse la Inquisicion el

pago ó de verificarse en poder del gobierno la compensacion, es á mi juicio demasiado sencilla, y solo debe comprender el período trascurrido desde el 27 de Agosto de 1801, fecha hasta la cual satisfizo los réditos Madrazo Corral, por cuenta de su tío Peña Madrazo, hasta el 6 de Agosto de 1810, en que fueron colocados los \$40,000 en el consulado de Veracruz. Si esta colocacion se considera hecha por cuenta de la Inquisicion, ya hemos visto que debe surtir el efecto de pago, y por consiguiente debió cesar el abono de réditos. Si se entiende hecha por cuenta del Concurso, hay compensacion entre el rédito que causaba el crédito de la Inquisicion y el que vencía el capital impuesto en el consulado.

Tampoco me parece dudoso quién sea el que tiene derecho á percibir los réditos de ese período. Tal derecho corresponde indudablemente al Erario Nacional que adquirió el crédito de la Inquisicion, y con él sus réditos vencidos. Sin embargo, deberán computarse las cantidades que la misma Inquisicion se haya abonado por cuenta de esos réditos.

Respecto de los \$ 5,510 del juzgado de testamentos de Michoacan, opino, como el juez de Distrito, que este crédito debe figurar entre los de la hipoteca general posterior á la adquisicion de Laureles por Peña Madrazo. Ciertamente es que el crédito es anterior á esa adquisicion y que tenía la hipoteca especial de los llenos que ya no existen, pero tenía tambien la hipoteca general de los bienes presentes y futuros de Peña Madrazo, y por lo mismo, desde el momento en que la finca llegó á ser su propiedad, ha debido reportar esa hipoteca general.

En cuanto á los 4,000 pesos que reclama Madrazo Corral, soy de sentir que debe confirmarse la sentencia de 2ª instancia dejando sin colocacion ese crédito. Me fundo para ello en que aunque el representante de Madrazo Corral alega

que hizo ese pago, como fiador de Peña Madrazo, no está justificada esta circunstancia, y si hay constancia en el expediente de que Madrazo Corral era agente en México de Peña Madrazo. Por consiguiente, debe entenderse que pagó los \$4,000, como representante de su tío, mientras no pruebe, como no ha probado, que lo hizo á nombre propio y con derecho á repetir.

Repito, que entre las sentencias de 1ª y 2ª instancia hay otras diferencias en cuanto al orden de colocacion de algunos créditos; pero creo inútil ocuparme de ellas especialmente, porque constando en autos la calidad de cada crédito y su respectiva antigüedad, basta aplicarles las reglas generales que el derecho tiene establecidas sobre estos puntos.

Hay otra cuestion demasiado importante, y procede de que, tanto en tiempo de la Inquisicion como en las épocas posteriores, diversos acreedores han recibido abonos por cuenta de réditos. Tal procedimiento ha sido ilegal, porque conforme á derecho no debe hacerse pago ninguno sino despues de la sentencia de graduacion. Pero el mal está ya causado, es irreparable, y está consentido así por los acreedores, como por los diversos jueces del Concurso. El único remedio posible es, que ejecutoriada la sentencia de graduacion, se liquiden los créditos con sus correspondientes réditos, y se liquiden tambien las cantidades que por vía de abono han percibido los acreedores, computándoles lo que quepa en el monto de sus haberes, y haciéndoles devolver lo que hubieren percibido de mas.

Respecto de la testamentaria del Sr. Michelena, esta operacion es mas delicada, pero tambien mas importante.

El Sr. Michelena ha manejado por muchos años los bienes del Concurso: ha dispuesto de fuertes cantidades, de las cuales se ha aplicado asimismo sumas no pequeñas. El mismo Sr. Michelena pres-

tó servicios y adquirió derechos que en justicia deben ser atendidos. Pero ni sus acciones, ni sus obligaciones pueden ser bien definidas sino despues de que, presentando la cuenta legal de su administracion, con vista de esta se purifiquen y liquiden esas acciones y obligaciones, y determinando su respectivo monto se aclare si es deudor ó acreedor y por qué cantidad.

Ya he llamado antes la atencion sobre que debiendo este crédito figurar en el pasivo del Concurso y no en el del deudor comun, su colocacion debia ser en primer lugar como carga comun del Concurso. Esto mismo está indicando, que su liquidacion debia ser previa á la adjudicacion en pago á los acreedores comunes, y aún á la misma sentencia de graduacion. Así pediria yo que se practicase si no me detuviera la consideracion de que, obrando de esa manera, se aplazaría de nuevo y por un término indefinido la terminacion del Concurso. En atencion á este inconveniente gravísimo, me resuelvo á aceptar el pensamiento de la sentencia de 2ª instancia, que consiste en dejar á salvo los derechos de la testamentaria del Sr. Michelena para reclamar al Concurso la cantidad que justificare deberle; pero imponiéndole á la vez la obligacion de presentar en un plazo dado la cuenta legal de su administracion; porque sin ella seria imposible fijar los respectivos derechos, así del Concurso, como del Sr. Michelena, procedentes de los contratos de sociedad y arrendamiento de la Hacienda de Laureles. Creo que imponiendo al representante de la testamentaria la obligacion de presentar la cuenta y dándose por parte del Concurso la caucion correspondiente para cubrir á la testamentaria el alcance que pueda resultarle, se salvarán las dificultades procedentes de la falta de liquidacion, y podrá llegarse sin inconveniente á la deseada determinacion del Concurso.

Es de la misma manera importante esa operacion respecto de los créditos que el Sr. Vallejo representa en lo personal y de las cantidades que por cuenta de ellos ha percibido. Respecto de esos créditos, hay la circunstancia especial y muy digna de tomarse en consideracion, de que las cesiones en que funda su derecho, no están autorizadas y consignadas en escrituras formadas sino que solo se comprueban con simples anotaciones puestas al márgen de los documentos primitivos. Este es un defecto capital que solo puede ser subsanado con la aprobacion del ejecutivo de la Union y el otorgamiento de las correspondientes escrituras. Debe, pues, imponérsele esa obligacion; y sin que sea debidamente llenada, los créditos respectivos no pueden figurar como suyos, sino como pertenecientes al Erario Nacional, quien deberá devolverle las cantidades que haya enterado por cuenta de esas cesiones.

La misma liquidacion es de suma importancia respecto de todos aquellos acreedores que han recibido algunas cantidades, y sin embargo, conforme á la sentencia de graduacion, no han de alcanzar á ser pagados con el haber del Concurso. Esos acreedores deben devolver las cantidades recibidas, para que sean aplicadas á los acreedores de mejor derecho por el orden de su colocacion.

Me ocuparé, para concluir, del punto sobre competencia del Tribunal de Circuito que este ha resuelto en la primera parte de su fallo. Algunos acreedores han negado al Tribunal esa competencia para conocer de varios puntos, fundándose en que estos no han sido materia del juicio en la primera instancia, y por lo mismo tampoco pueden serlo en la segunda. Este punto ha sido bien tratado y resuelto en dicha sentencia y por lo mismo me bastaria pedir que dicha sentencia sea confirmada en esa parte por sus propios legales fundamentos. Sin embargo, agregaré á ellos como

punto general la siguiente consideracion. Es cierto que los incidentes sobre origen del crédito refaccionario del Sr. Michelena, sobre su justificacion é importe líquido, no fueron discutidos entre las partes en el curso de la primera instancia, pero debieron serlo; porque es indudable que ningun crédito puede figurar en la sentencia de graduacion sin que conste de una manera satisfactoria su buen origen, su legalidad y su monto. Si los acreedores no discutieron estos puntos, si contra todo derecho toleraron que figurara el crédito refaccionario del Sr. Michelena, esto no prueba que realmente sea bueno, y es indudable que el juez de 1ª instancia pudo rechazarlo bien como malo, bien como incierto. De la misma manera el Tribunal de Circuito ha podido calificarle, sin que por esto se entienda que examinaba puntos ajenos á los que fueron resueltos en la primera instancia. La legalidad, la certidumbre, y en general la bondad de un crédito que ha figurado en el Concurso, nunca pueden considerarse extraños á la sentencia de graduacion; si esos puntos han sido mal resueltos, ó su exámen omitido en la primera instancia, esta es una razon de mas para que se examinen y resuelvan en la segunda. Por consiguiente, lejos de que en la segunda instancia se haya entrado en materias que no lo fueron de la primera, la verdad es que se han subsanado defectos gravísimos que en aquella fueron cometidos y que los puntos meramente considerados caian perfectamente bajo la jurisdiccion del Tribunal de segunda instancia como lo estuvieron bajo la del de primera.

Por los fundamentos expresados y á reserva de ampliarios si necesario fuere al tiempo de la vista, el Procurador general concluye pidiendo:

Primero; que se confirme la sentencia de vista en la parte en que el Tribunal de Circuito de Querétaro se declaró competente para conocer de los incidentes

que fueron agitados y resueltos en la segunda instancia.

Segundo; que se confirme dicho fallo en la parte en que excluyó el crédito de \$40,000 que originariamente perteneció á la extinguida Inquisicion; y que de hecho quedó cubierto con los \$40,000 colocados en el consulado de Veracruz; en cuanto á réditos de este capital, solo deben reconocerse los correspondientes al período trascurrido desde el 27 de Agosto de 1801, hasta el 6 de Agosto de 1810, y corresponden al Erario Federal; pero con obligacion de descontar lo que por cuenta de ellos hubiere percibido la Inquisicion.

Tercero; que se confirme el mismo fallo en la parte en que excluyó el crédito de \$4,000 reclamado por Madrazo y Corral.

Cuarto; que se reforme el mismo fallo en la parte en que colocó el crédito de \$5,510 del juzgado de testamentos de la mitra de Michoacan entre los simplemente escriturarios, y se coloque en primer lugar entre los de la hipoteca general posteriores á la compra que D. Juan de Peña Madrazo hizo de la hacienda de Laureles.

Quinto; que se reforme el propio fallo en todos los puntos que se refieren al crédito refaccionario del finado general Michelena, y en su lugar se resuelva que por no estar justificado ni liquidado ese crédito, quedan al interesado sus derechos á salvo para cobrar la cantidad que justifique debérsele realmente: que se declare tambien que el representante del finado Sr. Michelena tiene obligacion de presentar en la forma legal, y dentro de un plazo prudente y perentorio las cuentas de administracion por el tiempo que fué socio administrador de la finca, y por el que la explotó en calidad de arrendatario.

Los acreedores por su parte deberán prestar caucion por la que se comprometan á satisfacer á la testamentaria

del Sr. Michelena la cantidad que por liquidacion final alcanzare su causante. Esa presentacion de cuentas y esa liquidacion no impedirán que el Concurso siga hasta su terminacion.

Sesto; que se apruebe el repetido fallo de segunda instancia en todos los puntos relativos á la colocacion que dá á todos los créditos del Concurso, los cuales deberán ser satisfechos en el orden de esa colocacion, hasta donde alcance el capital.

Sétimo; que respecto de los créditos personales del Sr. D. José Vallejo procedentes de redenciones de capitales nacionales, se le exijan las correspondientes escrituras de cesion, y si no las presenta, se declare que esos créditos corresponden al Erario Nacional, quien deberá devolver al Sr. Vallejo las especies que este justifique haber enterado por cuenta de esas operaciones.

Octavo; que se declare que el mismo Sr. Vallejo tiene obligacion de presentar las cuentas de administracion de la hacienda de Laureles, por el tiempo que ha estado en su poder.

Noveno; que al hacerse pago á los acreedores de su respectivo capital y réditos, se les deduzca las cantidades que por cuenta de uno ú otros hayan percibido; y que así los que hubieren percibido de mas, como los que no alcancen á ser cubiertos segun su colocacion, devuelvan las cantidades de que resulten responsables.

Décimo; finalmente, y en cumplimiento de un deber imprescindible, pido que la sentencia de segunda instancia sea confirmada en la parte que impone una multa por infraccion de la ley del papel sellado.

Otro si, digo que por una equivocacion aparece á la foja tres de este pedimento la cantidad de \$97,216, como importe del crédito del Sr. Michelena, no debiendo ser sino de \$89,240, 21 cs.

Hace esta rectificacion para evitar malas intelijencias.

México, Diciembre 26 de 1871.—*L. Guzman.*

Es copia. México Mayo 16 de 1872. Por ocupacion del ciudadano secretario, *Alejo Gomez Eguarte*, oficial 2º y archivero.

EJECUTORIA de la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 15 de 1872.—Vistos, en lo relativo á los créditos que deben satisfacerse, los autos del concurso necesario formado á bienes de D. Juan de la Peña y Madrazo, dueño que fué de las Haciendas "Santa Bárbara de los Laureles," y anexas llamadas "Buena-vista" "Guadalupe" "Santa Ana" y "Barranquilla" en jurisdiccion de Zitácuaro en el Estado de Michoacan, cuyo Concurso comenzó el año mil ochocientos dos y tuvo su primera instancia primeramente ante el Subdelegado de Zitácuaro, luego en el tribunal de la Inquisicion, en seguida en el Juzgado de Hacienda de México y por último en el do Distrito de Michoacan, sustanciándose la segunda instancia en el Tribunal de Circuito de Querétaro y la tercera en esta primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos: vistas las liquidaciones de los respectivos créditos y la del activo del Concurso: el proyecto de graduacion formado en primera instancia por el Síndico del Concurso O. Lic. Bruno Patiño: las actuaciones conducentes de primera y de segunda instancia: las sentencias pronunciadas en ambas instancias, y lo pedido ante ésta primera Sala por el O. Procurador General de la Nacion: oido lo alegado ante la misma, al tiempo de la vista, por el O. Lic. Manuel Alvarez, en representacion del C. José Vallejo, con el carácter de albacea

del General D. Mariano Michelena; por el C. Lic. D. Manuel Inda, en representación del mismo C. José Vallejo, con el carácter de acreedor; por el C. Lic. Joaquín Velasco, en representación de D. José Elías Fagoaga con el carácter de Síndico del Concurso de D. José Gutiérrez de los Ríos, y en representación también el C. Lic. Velasco, del C. Manuel A. Campero por sí y por sus hermanos, herederos uno y otros de D. Nicolás Campero; por el C. Lic. José Linares, en representación del C. Pantaleón Parres, por sí y como cesionario de los demás herederos del Coronel D. Pedro Luciano Otero, y por el O. Procurador General de la Nación con el carácter de representante del Fisco; teniendo presente todo lo demás que convino, y Considerando: que en la junta de treinta y uno de Julio de mil ochocientos sesenta y ocho se encomendó al Síndico del Concurso, Lic. Patiño, la formación del proyecto de graduación de créditos, bajo el concepto de que graduase solamente los que alcanzaran ser pagados con el haber del Concurso, y de que no considerase en la graduación los demás: que en vista del resultado de ese proyecto, aprobado unánimemente por los acreedores en junta de veinticinco de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve, solo tienen lugar en este Concurso los créditos singularmente privilegiados, los hipotecarios con privilegio y los hipotecarios sin él, quedando sin lugar para ser pagados los acreedores de dominio, por no haberlos en este Concurso, y los acreedores quirográficos y meramente personales, por no alcanzar el fondo del Concurso para el pago de créditos de estas especies; y Considerando por último, las circunstancias relativas á cada uno de los créditos, se declara: Primero; se revoca la sentencia de segunda instancia, pronunciada el tres de Marzo del año próximo pasado, mil ochocientos setenta y uno, y se con-

firma por sus propios legales fundamentos la de primera instancia, pronunciada el veintiocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve, en la parte de su segunda resolución que dice: "los créditos del Concurso deben ser pagados en el orden y con la preferencia que se les dá en la siguiente graduación. Primero: El crédito de ochenta y nueve mil, doscientos cuarenta pesos, veintinueve centavos, de la testamentaria del General D. Mariano Michelena." En consecuencia se revoca también dicha sentencia de segunda instancia en el punto que dispuso se devolviese por la testamentaria la cantidad de cincuenta y siete mil doscientos pesos que ha recibido por réditos de su crédito mencionado.

Segundo: se revoca igualmente la sentencia de segunda instancia en el punto relativo á que la testamentaria del General Michelena devuelva para que ingrese al haber del Concurso la cantidad de veintinueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos, noventa y tres centavos que importan los réditos que recibió por el capital de las Sras. González Guerra.

Tercero: con arreglo á lo dispuesto en el artículo cuarto del decreto de doce de Julio de mil ochocientos cincuenta y seis, se revoca la sentencia de segunda instancia en la parte que condena al albacea de la testamentaria del General Michelena, á pagar la cantidad de trece mil quince pesos, setenta centavos, á la oficina de papel Sellado de Morelia como pena por haber usado en unas cuentas del papel comun.

Cuarto: de conformidad con lo pedido por el O. Procurador General, se reforma la sentencia de segunda instancia en la parte que colocó el crédito de cinco mil quinientos diez pesos del Juzgado de testamentos de la Mitra de Michoacán entre los simplemente escriturarios, y se colocará en primer lugar entre los de hipoteca general posterior-

res á la compra que D. Juan Peña Madrazo hizo de la Hacienda de Laureles, cuyo capital pertenece á la Hacienda Pública Federal, y la liquidacion de sus réditos la practicará el Promotor Fiscal.

Quinto: se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia de segunda instancia en los demás puntos, que con las convenientes correcciones dicen lo siguiente: "Primero: se declara que este Tribunal es y ha sido competente para conocer en el presente negocio, y para revisar, revocando ó confirmando, la sentencia de graduacion de créditos pronunciada en primera instancia, incluido el que ha reclamado el representante de la testamentaria del General D. José Mariano Michelena, así como para oír las excepciones que se hayan aducido en esta instancia."

Segundo: se confirma la citada sentencia de graduacion en sus considerandos sexto, sétimo y punto primero resolutivo, en la parte que declaró compensado el capital de cuarenta mil pesos, que se debían al Tribunal de la extinguida Inquisicion de México, con el de igual valor que tomó de los fondos del Concurso de Peña Madrazo, que impuso por su cuenta á censo redimible, por cinco años, en el abolido Consulado de comercio de Veracruz, con cuyo hecho dejó de figurar en el activo y pasivo del Concurso, y se declara, que la compensacion enunciada tuvo lugar el seis de Agosto de mil ochocientos diez, fecha de la imposicion en el Consulado, cuya compensacion se entiende con respecto á los capitales líquidos de los cuarenta mil pesos que se debieron mutuamente la Inquisicion y el Concurso: con respecto á los réditos vencidos por el primero de esos capitales desde el veintisiete de Agosto de mil ochocientos uno, hasta el diez de Agosto de mil ochocientos diez, pertenecen, no á la masa comun del Concurso, sino á la Hacienda Pública Federal, que se subrogó en los

derechos de la Inquisicion, cuyo cobro hará efectivo el representante del Erario, previa la liquidacion respectiva con la rendicion de cuentas, comprobada, de los setenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos cinco reales pertenecientes al Concurso, que administró la Inquisicion, sin que el O. José Vallejo, tenga derecho alguno á la cantidad que resulte de la liquidacion, quedando revocado, respecto de estos dos puntos aclaratorios, el auto de cuatro de Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve, dictado por el Juez de primera instancia Quinto: se revoca la referida sentencia de graduacion, en la parte en que colocó el crédito de cuatro mil pesos, sin réditos, llamado de Madrazo Corral, y se declara, que ese capital no debe figurar en el pasivo del presente Concurso, por no haberse justificado su legal procedencia. Sexto: se revoca asimismo la enunciada sentencia de graduacion, en la parte del punto segundo relativo, que colocó en segundo lugar el capital de dos mil trescientos pesos, y sus réditos, que perteneció al Hospital de locas de México: el de quinientos pesos y sus réditos del Monasterio de Monserrate de la misma Ciudad: el de mil trescientos diez y siete pesos, tres reales, sin réditos, procedente de alcabalas, y el de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos, tres reales, tambien sin réditos originado de las responsivas de guías, todos representados por el O. Vallejo en lo personal, y se revoca, asimismo, en todo el contenido del punto segundo de la parte resolutive, que concedió derechos al referido Vallejo á cobrar los réditos vencidos por los otros capitales en que se subrogó, por que esos réditos no pudo adquirirlos por los contratos que refiere celebrara con la Gefatura de Hacienda de Michoacan, á cuyos réditos solo tiene derecho la Hacienda Pública Federal. Séptimo: despues de quedar fue

ra del activo y pasivo del Concurso de Peña Madrazo, el capital expresado en el artículo segundo de esta sentencia, la graduación de los acreedores y créditos, por sus clases y orden de fechas para que sean pagados hasta donde alcance el fondo del Concurso, es la siguiente:

En primer lugar, el crédito de honorarios valioso de tres mil ochocientos setenta y siete pesos, sin réditos, perteneciente á los herederos de D. Ignacio Guerra Manzanares, y las costas del Concurso desde el seis de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete, previa la liquidación que hará el Síndico, y que presentará para que sea aprobada por los acreedores que han intervenido en esta segunda instancia, y por el Juez de Distrito de Michoacan.

En segundo lugar, deben ser pagados todos los créditos escriturarios con hipoteca especial registrada, según sus fechas, y son los siguientes. Primero: el capital de dos mil pesos del censo de D. Alonzo Solórzano, impuesto el veintuno de Mayo de mil seiscientos quince. Segundo: el de igual suma impuesto por el mismo Solórzano, á favor de la Capellanía de Jorge Baez Julian, el doce de Noviembre de mil seiscientos veintidos que perteneció al ex-convento de S. Francisco de Morelia, que los representan, el primero la Hacienda Pública Federal, y el segundo el C. Vallejo, en lo personal, quien los recibirá sin réditos, pues los vencidos por estos capitales, y en los términos que fueron liquidados por el Síndico del Concurso, en once de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve hasta la fecha del contrato de subrogación, pertenecen á la Hacienda Pública Federal.

Tercero: el capital de cuatro mil pesos, con sus réditos, según la liquidación del Síndico en la fecha citada, dote de la Capellanía fundada por el Lic. D. Juan de Barrientos, en mil seiscien-

tos cuarenta, que corresponde á la Hacienda Pública Federal.

Cuarto: el capital de dos mil pesos de la Capellanía de Doña Juana Cuadra, impuesto el veintidos de Mayo de mil seiscientos cuarenta.

Quinto: el de mil quinientos pesos, de la mandada fundar por Blas Hernandez de Vargas, el diez y nueve de Noviembre de mil seiscientos noventa: el de igual suma del ex-convento de S. Juan de la Penitencia de México, impuesto el veintitres de Diciembre de mil setecientos veintidos.

Sesto: el de tres mil pesos, de la Capellanía del Bachiller D. Antonio Paniagua, reconocida por D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra, en escritura de cinco de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho. Estos cuatro capitales del C. José Vallejo, sin los réditos vencidos hasta la fecha de la subrogación, pues esos pertenecen á la Hacienda Pública Federal, según la liquidación practicada por el Síndico en la fecha referida.

Sétimo: el capital de cuatro mil pesos, dote de la capellanía de D. Juan José Chavez.

Octavo: el de setecientos cincuenta pesos de la del Bachiller D. Juan Antonio Cardoso.

Noveno: el de trescientos pesos, de la cofradía del Santísimo de la Parroquia de Zitácuaro.

Décimo: el de cien pesos del aceite de la lámpara de la misma parroquia, reconocidos por la citada escritura de seis de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho.

Undécimo: el de ocho mil pesos de los legados de cuatro mil pesos, cada uno, dejados por Doña Teresa Bernal de Aztete fincados á favor del ex-convento de Carmelitas de México.

Décimo segundo: el de mil cien pesos de otro legado dejado por la misma señora, á favor del ex-convento de Sta.

Teresa la antigua de la misma Ciudad, reconocidos estos legados por D. Antonio Vicente Gonzalez Guerra, en la escritura de seis de Mayo del citado año de mil setecientos cincuenta y ocho. Esos seis capitales con sus réditos segun fueron liquidados por el Síndico, pertenecen á la Hacienda Pública Federal.

Décimotercero: el capital de dos mil trescientos pesos que fué del Hospital de locas de México.

Décimo cuarto: el de quinientos pesos del Monasterio de Monserrate, reconocido por la mencionada escritura de seis de Mayo, pertenecen al C. Vallejo, sin réditos vencidos hasta la fecha de la subrogacion, conforme á la liquidacion del Síndico y los anteriores pertenecen á la Hacienda Pública Federal.

Décimo quinto: el capital de cuarenta mil pesos, impuestos por escritura de ocho de Agosto de mil setecientos noventa y nueve, á favor de los hijos del Coronel D. Pedro Luciano Otero, del que pertenecen veinticuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos cincuenta centavos, al Concurso de D. Joaquin Gutierrez de los Rios, y el resto de quince mil veinticinco pesos cincuenta centavos, á los herederos de D. Nicolás Campero, debiéndose pagar los réditos de ese capital á razon del cinco por ciento anual, vencidos desde el ocho de Agosto de mil ochocientos uno hasta igual fecha del año próximo pasado, y los que se vencieren hasta la terminacion del Concurso, cuya liquidacion se hará por las partes en forma y con citacion del Promotor Fiscal, estimándose la que corresponda tanto al concurso de Rios y herederos de Campero, como á la de Parres, contándose para este desde mil ochocientos uno hasta mil ochocientos veintiseis.

Décimo sexto: el capital de veinte mil ochocientos siete pesos, impuesto por escritura de diez y ocho de Setiembre de mil setecientos noventa y nueve,

Tomo III—Parte II.

perteneciente á las Sras. Doña Ana Félix, Doña María Antonia y Doña María Micaela Gonzalez de la Guerra, á las que, ó á sus herederos, se les citará en la forma legal por el Juzgado de Distrito de Michoacan, fijándose el plazo que estime conveniente al efecto para la liquidacion de los réditos, desde los últimos que recibieron, y que se han vencido hasta Setiembre del año pasado; y si no comparecen procederá el C. Lic. defensor de ausentes en union del Síndico á practicar la liquidacion enunciada.

Décimo sétimo: el capital de dos mil cien pesos de los legados dejados por Doña Ana Josefa Estensoro para la Virgen de Zapopan y el ex-convento de S. Francisco de Zitácuaro, los que pertenecen á la Hacienda Pública Federal, cuyos réditos no fueron liquidados, cuya operacion se practicará por el C. Promotor Fiscal del Juzgado de Distrito de Michoacan, y el Síndico del Concurso.

Décimo octavo, y por último, el de tres mil pesos y sus réditos, á razon del cinco por ciento anual, perteneciente á D. Vicente López Varela, á quien se citará, ó á sus herederos, por el Juzgado de Distrito de Michoacan, y se procederá en los mismos términos antes dichos, con respecto á las Sras. Gonzalez Guerra.

En tercer lugar deben ser pagados hasta donde alcance el activo del Concurso, los créditos meramente escriturarios y sin hipoteca especial registrada, cuyos títulos aparecen en los autos, no tomándose en consideracion los que carecen de comprobantes, y por lo mismo solo deberán pagarse. Primero: el capital de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos, sin réditos, que representa Doña Francisca Estrada, sucesora de Doña Josefa Peña Madrazo. Segundo: el de mil, ciento cuarenta y seis pesos, sin réditos, perteneciente á

los vecinos de Maravatío, que debió servir para la construcción de un puente. Cuarto: el capital de mil trescientos diez y siete pesos, tres reales, procedente de alcabalas, y el de dos mil ochocientos cincuenta y ocho pesos, tres reales, de unas responsivas de guías, sin réditos y que representa el C. José Vallejo.

En cuarto lugar serán pagados todos los acreedores quirográficos hasta donde alcance y según el orden que por sus fechas fijó el Síndico del Concurso en el proyecto de graduación en que se fundó la sentencia del veintiocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve, la que queda subsistente en lo que no se revoca ni modifica... por esta de tercera instancia. Noveno: se dejan á salvo los derechos del C. José Vallejo, para que ocurra á la gefatura de Hacienda de Michoacan, á fin de que se le devuelvan las especies que pagó, en los mismos términos que las enteró por la cesión de derecho que le hizo la Hacienda Pública en cuanto queda sin efecto por virtud de esta sentencia. Décimo: prevengase al C. Promotor Fiscal, que teniendo á la vista la comunicación del C. Ministro de Hacienda y crédito público, visible á fojas 110 frente del Toca, proceda á la liquidación respectiva á que se refiere, fijando su atención en la falta de productos á que alude; manifestándose por vía de aclaración, que esa liquidación no fué hecha en segunda instancia por no dilatar el resultado final, como por estimarse suficiente el capital para el pago de los créditos de la Hacienda Pública. Duodécimo: no se hace especial condenación en costas." Sesto: devuélvase las actuaciones de primera y de segunda instancia al Tribunal de Circuito de Querétaro, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos: hágase saber á las partes que han figu-

rado en esta tercera instancia, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos, respecto de los puntos primero y segundo, y por unanimidad respecto de los demás, los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.

S. Lerdo de Tejada.—*Pedro Ogazon.*
—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*
—*M. Auza.*—*Luis María Aguilar, Secretario.*

Es copia. México, Mayo 17 de 1872.

Alejo Gomez Izguarte, oficial 2º y archivero.

PEDIMENTO del C. Procurador General, pidiendo aclaración de la anterior sentencia.

El Procurador General de la Nación dice: que en su respuesta de 27 de Marzo próximo pasado, indicó con el debido respeto que, á su juicio, la sentencia de revista necesitaba ser aclarada en varios puntos importantes; y á fin de formular esos puntos de aclaración, pidió se le expidiera testimonio de la sentencia. La Sala, con objeto de evitar demoras, se sirvió mandar se me entregase el Toca por un corto término; y habiéndose así verificado, cumpla mi ofrecimiento, aceptando casi sin variación, lo expuesto por los Ciudadanos Licenciados Velasco y Linares en su ocurso de 25 del mismo Marzo.

No cabe duda en que la sentencia de revista ha confirmado, sin variación alguna, el punto 10º de la sentencia de 2ª instancia; y por lo mismo debe procederse á la liquidación á que se refirió el Ministerio de Hacienda, en su nota que obra á fojas 110 del Toca de 2ª instancia. Y es muy natural que esa liquidación comprenda, no solo el tiempo transcurrido hasta el día en que se pronunció dicha sentencia, sino además todo el

que trascurra hasta el de la entrega de la finca por su actual poseedor.

Es muy probable que el crédito de las Señoras Gonzalez Guerra, segun la colocacion, que se le ha dado en la sentencia de graduacion, no alcance á ser satisfecho con el haber del Concurso. Si esto se verifica, seria una notoria injusticia, que no puede haber estado en la mente de la Sala, que el representante actual de ese crédito retuviera la fuerte suma que consta haber percibido por cuenta de réditos. Estos, como cosa accesorio, deben seguir la suerte de lo principal, que es el mismo crédito; y si el último no alcanza á ser pagado, la obligacion de devolver lo percibido por cuenta de los primeros, es de derecho incuestionable. No dudo ni por un momento que esta ha sido la mente de la Sala; pero como los términos en que está redactada la parte relativa de la sentencia podrán dar lugar á que se creyese que en ningun caso está obligada la testamentaria del Sr. Michelena, á devolver los \$ 21,846, 93 cs. que percibió, es indispensable explicar, que esta declaracion solo tiene lugar en el caso de que el crédito de las Señoras Gonzalez Guerra alcance á ser cubierto con el haber del concurso; pues en caso contrario, la devolucion procede de pleno derecho.

En el punto relativo á costas, creo, como los Señores Velasco y Linares, que cuando las gestiones del Sr. Vallejo, en lo relativo al crédito de la Inquisicion, han sido desechadas en las tres instancias, debe condenársele al pago de las costas causadas en esta 3ª

Pido, pues, á la Sala, que respecto de los tres puntos indicados, se sirva aclarar su sentencia en los términos que quedan expresados.

México, Abril 9 de 1872.—*L. Guzman.*

Es copia. México, Mayo 17 de 1872.—*Alejo Gomez Eguarte* oficial 2º y archivero.

AUTO que recayó al anterior pedimento.

México, Abril 17 de 1872.

Vistos los ocurso de los CC. Lic. Joaquin Velasco y José Linares, el del C. Lic. Manuel Inda y el pedimento del C. Procurador General de la Nacion, relativos á que se aclare la sentencia pronunciada por esta Sala el quince de Marzo próximo pasado en los puntos á que se refiere, se declara: Primero; que no ha lugar á aclarar el punto relativo á si la testamentaria de D. Mariano Michelena está, ó no, obligada á devolver al Concurso los veintun mil ochocientos cincuenta y seis pesos noventa y tres centavos, que ha recibido por causa de réditos del capital de veinte mil ochocientos siete pesos, que perteneció á las Sras. Gonzalez Guerra y fué cedido por ellas á Michelena; pues segun la misma sentencia, en tanto se dispuso que la testamentaria no devuelva al Concurso la cantidad de veintun mil ochocientos cuarenta y seis pesos noventa y tres centavos que importan los réditos que recibió por el capital de las Sras. Gonzalez Guerra, en cuanto á que el capital ó crédito, tenga lugar en el Concurso para ser cubierto; pues en este caso, como sucede en créditos de Concurso, deben pagarse los réditos primero que el capital de que proceden y por lo mismo, si el capital no alcanza á ser cubierto y queda en consecuencia excluido de pago, no tiene lugar el pago de los réditos y deben devolverse los que se hayan recibido.

Segundo: que tampoco ha lugar á aclarar la sentencia en el punto relativo á que se condene al C. José Vallejo al pago de las costas causadas en esta tercera instancia, porque esto importaria la revocacion y no la aclaracion de la sentencia en ese punto, porque luego se conoce que al confirmar la Sala, como confirmó el artículo duodécimo de la sentencia de segunda instancia, que dice: "No se hace especial condenacion en

costas" fué que este punto se considere parte, como lo es, de la sentencia de 3ª instancia, pues á no haber sido así se habria expresado lo conducente respecto de condenacion de costas en la tercera instancia; y para no condenar en ellas á ninguna de las partes, se tuvo en consideracion entre otras cosas, respecto de Vallejo, que la duracion del Concurso, la complicacion de él y los motivos que su representante y abogado C. Lic. Manuel Inda, espuso en favor del pago de los créditos de Vallejo, y especialmente del de la ex-Inquisicion, alegar la presuncion de mala fé y temeridad al insistir en tal pago.

Tercero: que no necesita de aclaracion el punto relativo al artículo décimo de la sentencia de 2ª instancia que dispone se prevenga al Promotor Fiscal que teniendo á la vista la comunicacion del Ministerio de Hacienda y Crédito Público visible á fojas 110 frente del Toca, (el de segunda instancia,) proceda á la liquidacion respectiva á que se refiere, fijando su atencion en la falta de productos á que alude, manifestándose por vía de aclaracion que esa liquidacion no fué hecha en segunda instancia por no dilatar el resultado final, como por estimarse suficiente el capital para el pago de los créditos de la Hacienda Pública; "cuya aclaracion solicita el C. Procurador General; pues claramente se entiende que la liquidacion que pueda todavía hacerse se refiere á lo que esté pendiente, y en ello no puede incluirse el crédito de Michelena, que fué aprobado por los acreedores del Concurso; siendo precisamente el hecho de haber sido aprobado, liquidado y reconocido dicho crédito por los acreedores, el fundamento de esta sentencia de tercera instancia para disponer su pago.

Cuarto: que no tiene que hacerse la aclaracion que solicita el Lic. Inda, respecto de lo relativo al artículo noveno de la sentencia de segunda instancia que

deja á salvo los derechos del C. José Vallejo para que ocurra á la Jefatura de Hacienda de Michoacan á fin de que se le devuelvan las especies que pagó en los mismos términos que las enteró por la cesion de derechos que les hizo la Hacienda Pública en cuanto queda sin efecto por virtud de esa sentencia; pues ese punto está claramente explicado, puesto que determina que se devuelvan al C. Vallejo las especies que pagó en los términos que las enteró, y puesto que aunque algunas de las operaciones hechas con la Hacienda pública por el C. Vallejo, lo fueron en el mes de Agosto del año mil ochocientos cincuenta y nueve y en la escritura relativa se obligó la Hacienda Pública á la eviccion y saneamiento, sin embargo, por las circunstancias especiales de esta clase de negocios la eviccion y saneamiento en ellos solo puede y debe verificarse conforme á varios principios de derecho en la devolucion de las especies recibidas; de manera, que la disposicion relativa del reglamento de cinco de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno, no estableció realmente una regla nueva, sino que solo hizo una declaracion de lo que era conforme á derecho en esta clase de negocios.

Quinto: que tampoco tiene que hacerse aclaracion respecto del punto relativo al crédito de la Sra. Dª Francisca Roman de Melo que representa el C. José Vallejo, pues los réditos que correspondan al Capellan de la Capellanía fundada por D. Blas Hernandez y fueron cedidos por éste á D. Manuel Melo, esposo de la Sra. Dª Francisca Roman, deberán satisfacerse lo mismo que cualquiera otro crédito á la persona que tenga derecho de percibirlo, en el caso de que alcance ser pagado.

Sesto: Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos respecto del tercer punto y por una-

nimidad respecto de los demás los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Mayo 17 de 1872.—*Alejo Gomez Eguiarte*, Oficial 2º y archivero.

• ACUERDO de la Suprema Corte de Justicia en la consulta hecha por el Juez de Distrito de Puebla, sobre quién deba conocer de un Juicio en que están impedidos el Juez propietario y los tres suplentes.

El C. Juez de Distrito del Estado de Puebla de Zaragoza, con fecha cuatro del corriente consultó á esta Corte Suprema quién debía conocer de un negocio en que están impedidos el Juez nato y los tres suplentes, á cuya consulta se acordó lo siguiente.

“México, Julio 6 de 1872.—Contéste-se, que no estando por la Constitución limitados los Tribunales Federales á territorio determinado, en cuanto al conocimiento de los negocios, la jurisdicción de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito podría ampliarse á mayor territorio del que tiene señalado actualmente: que si la ley ha señalado un territorio determinado á cada Tribunal de Circuito y á cada Juzgado de Distrito, lo ha hecho con el solo objeto de que la Justicia se administre con mas prontitud y menos molestias de los interesados: que por lo mismo, en el supuesto de que un Tribunal de Circuito ó en un Juzgado de Distrito haya negocios en que el Juez propietario y todos los suplentes estén impedidos de conocer, atendiendo á la naturaleza de la Jurisdicción Federal, el Tribunal de Circuito ó el Juzgado de Distrito mas inmediatos pueden

conocer de dichos negocios: que tratándose en el caso de la consulta del Juez de Distrito de Puebla, de un negocio radicado ya en un Juzgado y el cual por lo mismo deberá sentenciarse por un Tribunal que se halla establecido previamente [artículo 14 de la Constitución Federal,] la falta absoluta de los Jueces no podría subsanarse por medio de una ley que estableciera otros nuevos para que conocieran del mismo negocio; sino que solo puede subsanarse por la aplicación judicial del derecho existente; cuya aplicación corresponde á esta Suprema Corte de Justicia para designar en este caso el Juez competente: que en la administración de justicia del fuero comun, se ha observado la práctica de que, cuando en un territorio judicial estuvieran todos los Jueces impedidos de conocer en algunos negocios, conociera de ellos el Juez del territorio mas inmediato, segun la prevencion del artículo 85 de la ley de 23 de Mayo de 1837; y que por todos estos fundamentos el Juez de Distrito de Puebla debe pasar el conocimiento del negocio á que se refiere en su consulta, al Juez de Distrito cuya residencia esté mas inmediata de los comprendidos en el mismo Circuito. Trascríbase este acuerdo al Tribunal de Circuito de Puebla. Una rúbrica—*Aguilar*.—secretario.

Es copia que certifico para su publicación. México, Julio 13 de 1872.—*Agustin Peralta*.

COMPETENCIA. Promovida por el Juzgado 1º de lo civil de México al Juzgado de lo criminal de Querétaro, para conocer de la demanda entablada por la Sra. Doña Margarita Fernandez de Córdova, albacea de la Sra. Doña Dolores Martinez Munguía, contra el C. Agustin Fernandez de Córdova, sobre rendición de cuentas en la administración del intestado de Doña Dolores Martinez Munguía.

PEDIMENTO FISCAL:

El Fiscal dice: que el Juzgado 1º de lo civil de México, ha iniciado compe-